

PERIODICO



OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO

PRIMER SEMESTRE

**LAS LEYES DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE
EN ESTE PERIODICO**

FRANQUEO PAGADO PUBLICACION PERIODICA PERMISO NUM.:001-1082
CARACTERISTICAS: 113182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

DIRECTOR RESPONSABLE EL C. SECRETARIO GRAL. DEL GOBIERNO DEL EDO.

PRIMER SEMESTRE

S U M A R I O PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO.-

Que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos Artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal de la Ley de Amparo, de la Ley de Extradición Internacional del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto público Federal y de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federación.-..... PAG. 226

AVISO DE FUSION Y DOS ESTADOS FINAN- CIEROS.-

Aviso de Fusión de la Compañía Industrial de Atenuque, S.A. de C.V. - y de Servicios Atensa, S.A. de C.V., así como Estado de Situación Financiera de Servicios Atensa, S.A. de C.V. al 31 de Agosto de 1993 y Estado de Situación Financiera de la Compañía Industrial de Atenuque, S.A. de C.V. al 31 de Agosto de 1993.-..... PAG. 238

ACUERDO.-

Sobre el Financiamiento Público a los Partidos Políticos en los términos del Artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.-..... PAG. 241

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

2 ACTAS DE EXAMEN.-

De Antecedentes Academicos de las siguientes:

MARIA DEL CARMEN HOLGUIN RUIZ
ANTONIA AGUIRRE GUZMAN

PAG. 243
PAG. 244

SEGUNDA SECCIÓN

SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuego Común y para toda la República en Materia de Fuego Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Extradición Internacional, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed.

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA:

SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA

DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUEGO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUEGO FEDERAL DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE EXTRADICION INTERNACIONAL DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA Y DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL Y DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

ARTICULO PRIMERO.—El Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuego Común y para toda la República en Materia de Fuego Federal, se reforman los artículos 9, 12 párrafos primero y segundo, 13 primer párrafo y fracciones V, VI y VII, 15, 16, 17, 29 párrafo segundo, 30 fracciones I, II, 32 fracción VI, 34 párrafo primero, 35 párrafo cuarto, 37, 52, 53 párrafos primero y segundo, 56 fracción II, 61, 62, 64 segundo párrafo, 64 bis, 65, 66, 71 párrafo primero, 65 párrafo primero, 68 fracción II, 90 inciso b) de la fracción I, y fracciones VII y VIII, 93 párrafo primero, 107 párrafo segundo, 111 y 113, 153, 158 primer párrafo, 164 segundo

párrafo, 170, 172 bis, 173 primer párrafo, 178-187, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201 párrafos primero y segundo, 209, 210, 225 fracciones IX, X, XII, XVIII, XX, 228 fracción I, 231 párrafo primero, 340, 341, 247 párrafo primero y fracciones I y IV en su primer párrafo, 248 primer párrafo, 250 primer párrafo y fracciones I, II, IV, 254-303, 310, 323, 368 fracción I, 368 bis, y 390. Del mismo Código se adicionan: Un párrafo segundo al artículo 7, dos últimos párrafos al artículo 13, un párrafo cuarto al artículo 27, recorriéndolos en su orden los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto, pasando a ser los párrafos quinto, sexto y séptimo, un artículo 31 bis, un segundo párrafo al artículo 34, recorriéndolos en su orden los actuales párrafos segundo y tercero pasando a ser tercero y cuarto, el artículo 35 un último párrafo, un artículo 69 bis, un artículo 109, quinto párrafo del artículo 93 recorriéndolos los actuales párrafos segundo y tercero para ser los párrafos tercero y cuarto, un párrafo tercero y un párrafo cuarto del artículo 110, un artículo 195 bis, un artículo 196 bis, las fracciones II y IV al artículo 231, un artículo 248 bis, un párrafo segundo al artículo 253, un artículo 321 bis, un artículo 336 bis, un artículo 388 bis, y un párrafo segundo del artículo 390 y el apéndice I, se derogan: Los artículos 59 de la fracción VI del artículo 60, el último párrafo del artículo 70, el inciso a) de la fracción I del artículo 90, una fracción, XXVII del artículo 225, 293, la fracción II del artículo 303, 311, 324, 325, 326, 327, 328, el segundo párrafo de la fracción X del artículo 387, se modifican: Las denuncias de los Capítulos Segundo y Cuarto del Título Tercero del Libro Primero, Capítulo I del Título Séptimo del Libro Segundo, del Capítulo Primero del Título Decimoveno del Libro Segundo, para quedar como siguen:

Artículo 7.—En los delitos de resultado, material también se tipifica el resultado típico, cuando el agente omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado típico es consecuencia de la conducta activa, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar, para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

I. En los delitos de resultado, material también se tipifica el resultado típico, cuando el agente omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado típico es consecuencia de la conducta activa, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar, para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

II. La naturaleza de la acción u omisión y la gravedad del delito, así como los motivos que lo impulsaron o lo motivaron, serán considerados para determinar la pena.

III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado.

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido.

V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o lo motivaron, serán considerados para determinar la pena.

VI. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido.

VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de cometer el delito, así como las circunstancias que sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

Artículo 9.—El resultado típico se produce por caso fortuito.

Artículo 12.—Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 13.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 15.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 16.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 17.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 18.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 19.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 20.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 21.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 22.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 23.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 24.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 25.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 26.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 27.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 28.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 29.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 30.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 31.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 32.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 33.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 34.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 35.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 36.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 37.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 38.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 39.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 40.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 41.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 42.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 43.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 44.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 45.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 46.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 47.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 48.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 49.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 50.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 51.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 52.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 53.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 54.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Artículo 55.—Se impondrá la pena de prisión en el caso de tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

VI.—El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente cuando aquellos fueren culpables.

Artículo 34.—La reparación del daño proveniente de delito que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público. El ofendido o sus derechohabientes podrán aportar al Ministerio Público o al juez en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales.

Artículo 35.—El incumplimiento por parte de las autoridades de la obligación a que se refiere el párrafo anterior, será sancionado con multa de treinta a cuarenta días de salario mínimo.

Artículo 35.—

Los depósitos que garanticen la libertad cautelar se aplicarán como pago preventivo a la reparación del daño cuando el inculcado se surtiera a la acción de restitución.

Artículo 36.—El mandante hacer efectivos tales depósitos, se prevendrá a la autoridad ejecutora que conserve su importe a disposición del tribunal, para que se haga su aplicación conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo.

Artículo 37.—La reparación del daño se mandará hacer efectiva, en la misma forma que la multa. Una vez que la sentencia que imponga tal reparación cause ejecutoria, el tribunal que la haya pronunciado remitirá de inmediato copia certificada de ella a la autoridad fiscal competente y ésta, dentro de los tres días siguientes a la recepción de dicha copia, iniciará el procedimiento económico-coactivo, notificando de ello a la persona en cuyo favor sea haya decretado, o a su representante legal.

Artículo 38.—El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

I.—La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto;

II.—La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

III.—Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;

IV.—La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;

V.—La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o lo motivaron, serán considerados para determinar la pena;

VI.—El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido;

VII.—Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de cometer el delito, así como las circunstancias que sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

Artículo 55 bis.—Se deroga.

Artículo 56.—Se deroga.

Artículo 57.—Se deroga.

Artículo 58.—Se deroga.

Artículo 59.—Se deroga.

Artículo 60.—Se deroga.

Artículo 61.—Se deroga.

Artículo 62.—Se deroga.

Artículo 63.—Se deroga.

Artículo 64.—Se deroga.

Artículo 65.—Se deroga.

Artículo 66.—Se deroga.

Artículo 67.—Se deroga.

Artículo 68.—Se deroga.

Artículo 69.—Se deroga.

Artículo 70.—Se deroga.

Artículo 71.—Se deroga.

Artículo 72.—Se deroga.

Artículo 73.—Se deroga.

Artículo 74.—Se deroga.

Artículo 75.—Se deroga.

Artículo 76.—Se deroga.

Artículo 77.—Se deroga.

Artículo 78.—Se deroga.

Artículo 79.—Se deroga.

Artículo 80.—Se deroga.

Artículo 81.—Se deroga.

Artículo 82.—Se deroga.

Artículo 83.—Se deroga.

Artículo 84.—Se deroga.

Artículo 85.—Se deroga.

Artículo 86.—Se deroga.

Artículo 87.—Se deroga.

Artículo 88.—Se deroga.

Artículo 89.—Se deroga.

Artículo 90.—Se deroga.

Artículo 91.—Se deroga.

Artículo 92.—Se deroga.

Artículo 93.—Se deroga.

Artículo 94.—Se deroga.

Artículo 95.—Se deroga.

Artículo 96.—Se deroga.

Artículo 97.—Se deroga.

Artículo 98.—Se deroga.

Artículo 99.—Se deroga.

Artículo 100.—Se deroga.

Artículo 101.—Se deroga.

Artículo 102.—Se deroga.

Artículo 103.—Se deroga.

Artículo 104.—Se deroga.

Artículo 105.—Se deroga.

Artículo 106.—Se deroga.

Artículo 107.—Se deroga.

Artículo 108.—Se deroga.

Artículo 109.—Se deroga.

Artículo 110.—Se deroga.

Artículo 111.—Se deroga.

CAPITULO II

Aplicación de sanciones a los delitos culpables

Artículo 60.—En los casos de delitos culpables se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquellos que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de diez años, o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso.

Las sanciones por delito culpable solo se impondrán con relación a los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167 fracción VI, 169, 189 bis, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397 y 399 de este Código.

Cuando a consecuencia de actos u omisiones culpables, calificados como graves, que sean imputables al personal que preste sus servicios en una empresa ferroviaria, aeronáutica, naviera o de cualesquiera u otros transportes de servicio público federal o local, se causen homicidios de dos o más personas, la pena será de cinco a veinte años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión o inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Igual pena se impondrá cuando se trate de transporte de servicio escolar.

La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del juez, quien deberá tomar en consideración las circunstancias señaladas en el artículo 52, y las especiales siguientes:

I.—El deber del cuidado del inculcado que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que desempeñe impongan;

II.—El estado de salud del inculcado;

III.—El grado de culpabilidad;

IV.—El grado de culpabilidad;

V.—El grado de culpabilidad;

VI.—Derogado.

Artículo 61.—En los casos a que se refiere la primera parte del primer párrafo del artículo anterior se exceptúa la reparación del daño. Siempre que el delito doloso corresponda sanción alternativa que incluya una pena no privativa de libertad, se aplicará esa sanción al responsable de dicho delito.

Artículo 62.—Cuando por culpa se ocasione un daño en propiedad ajena que no sea mayor del equivalente a cien veces el salario mínimo, se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado, más la reparación de éste. La misma sanción se aplicará cuando el delito culpable se ocasione con motivo del tránsito de vehículos cualquiera que sea el valor del daño.

Cuando por culpa y por motivo del tránsito de vehículos se causen lesiones, cualquiera que sea su naturaleza, se procederá a la petición del ofendido o de su legítimo representante,

Artículo 107.-

Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio.

Artículo 110.-

La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente, por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del inculcado que formalmente haga el Ministerio Público de una entidad federativa al de otra donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito. En el primer caso también causará la interrupción las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida haga la entrega o en tanto desaparezca la situación legal del detenido, que de motivo al aplazamiento de su entrega.

La interrupción de la prescripción de la acción penal, sólo podrá ampliar hasta una mitad los plazos señalados en los artículos 105, 106 y 107 de este Código.

Artículo 111.- Las prevenciones contenidas en los dos primeros párrafos y en el primer caso del tercer párrafo del artículo anterior, no operarán cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción.

Se exceptúa de la regla anterior el plazo que el artículo 107 fija para que se satisfaga la querrela u otro requisito equivalente.

Artículo 115.- La prescripción de la sanción privativa de libertad sólo se interrumpe aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se efectúe por otro delito diverso, o por la formal solicitud de entrega que el Ministerio Público de una entidad federativa haga al de otra en que aquél se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida haga la entrega o desaparezca la situación legal del detenido que motive aplazar el cumplimiento de lo solicitado.

La prescripción de las demás sanciones se interrumpirá por cualquier acto de autoridad competente para hacerlas efectivas. También se interrumpirá la prescripción de la pena de reparación del daño o de otras de carácter pecuniario, por las promesas que el ofendido o persona a cuyo favor se haya decretado dicha reparación, haga ante la autoridad fiscal correspondiente y por las actuaciones que esa autoridad realice para efectuarlas, así como por el inicio de juicio ejecutivo ante autoridad civil usando como título la sentencia condenatoria correspondiente.

Artículo 153.- Si la reaprehensión del prófugo se lograre por gestiones del responsable de la evasión, se aplicarán a éste de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, según la gravedad del delito imputado al preso o detenido.

Artículo 158.- Se impondrán de quince a noventa jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

II.-

Artículo 164.-

Se impondrán de ocho años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando el delincuente:

1.- Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las medidas que disponga la Ley de Vías Generales de Comunicación y de las sanciones correspondientes, en su caso, por otros delitos cometidos.

Artículo 173.- Se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

1.-

Artículo 178.- Al que, sin causa legítima, rehusare a prestar un servicio que le imponga la Ley le obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de quince a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 187.- Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública se le aplicarán de treinta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

DELITOS CONTRA LA SALUD

CAPÍTULO PRIMERO

De la producción, tenencia, tráfico, proleptismo y otros actos en materia de narcóticos.

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstas en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III, y 246 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

El juzgador, al individualizar la pena a la medida de seguridad a imponer por el delito, tendrá en cuenta el delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor injerencia en el peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho o la reincidencia en su caso.

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el embargo preventivo de los bienes que se presumen relacionados con el delito, o de los bienes que se trate o su producto, se destinen a la impunidad de justicia, o se promuevan en su caso, la intervención de la policía de los derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables.

Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se le impondrá, además, la destitución de empleo, cargo o comisión pública o inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas, en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión pública.

Artículo 170.- Al que empleando explosivos o materiales incendiarios, o por cualquier otro medio, destruya total o parcialmente una nave, aeronave, u otro vehículo de servicio público federal o local, o que proporcione servicios al público, así se encontrarán ocupados por una o más personas, se le aplicarán de veinte a treinta años de prisión.

Si en el vehículo de que se trate no se hallare persona alguna se aplicará prisión de cinco a veinte años.

Asimismo se impondrán de tres a veinte años, de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que cometa, al que mediante violencia física, amenazas o engaño, se apodere de una nave, aeronave, máquina o tren ferroviarios, autobuses, o cualquier otro medio de transporte público colectivo, interestatal o internacional, o los haga desviar de su ruta o destino.

Cuando se cometiere por servidor público de alguna corporación policial, cualquiera de los delitos que contemplan este artículo y el 168, se le impondrán, además de las penas señaladas en estos artículos, la destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión pública. Si quien cometiere los delitos mencionados fuere miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá, además, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión pública.

Artículo 172 bis.- Al que para la realización de actividades delictivas utilice o permita el uso de aeronaves, aeroplanos, helicópteros, dirigibles, aterrizaje o cualquiera otra instalación destinada al tránsito aéreo que sean de su propiedad o estén en su cargo y cuidado, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa, y decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito, cualquiera que sea su naturaleza. Si dichas instalaciones son clandestinas, la pena se aumentará en una mitad.

Las mismas penas se impondrán a quienes realicen vuelos clandestinos, o proporcionen los medios para facilitar el aterrizaje o despegue de aeronaves, o el mantenimiento o mantenimiento de las aeronaves utilizadas en dichas actividades.

Si las actividades delictivas a que se refiere el primer párrafo se relacionan con delitos contra la salud, las penas de prisión y de multa se duplicarán.

Al que construya, instale, acondicione o ponga en operación los inmuebles e instalaciones a que se refiere el párrafo anterior, sin haber obtenido las normas de concesión, aviso o permiso contenidas en la legislación respectiva, se le impondrá de tres,

Artículo 196.- Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo 194, serán aumentadas en una mitad, cuando:

1.- Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos contra la salud o por un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, suspensión para desempeñar cargo o comisión en el servicio público, hasta por cinco años, o destitución, o inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Si se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en cualquiera de las situaciones mencionadas se le impondrá, además, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca, y se le inhabilitará hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, para desempeñar cargo o comisión pública en su caso.

2.- La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente.

3.- Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de esos delitos.

4.- Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de detención, o en sus inmediaciones con quienes a ellos acudan.

5.- La conducta sea realizada por profesionales, técnicos, auxiliares o personal relacionado con el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta.

6.- El agente determine a otra persona a cometer algún delito de los previstos en el artículo 194, aprovechando el ascendente familiar o moral o la autoridad o jerarquía que tenga sobre ella.

7.- Se trate del propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare para realizar algunos de los delitos previstos en este capítulo o permitiere su realización por terceros. En este caso además, se clausurará en definitiva el establecimiento.

Artículo 196 bis.- Se impondrá prisión de veinte a cuarenta años y de quinientos a diez mil días multa, así como decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien por sí, a través de terceros o a nombre de otros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación delictiva constituida con el propósito de practicar delitos que produzcan cualquiera de las actividades delictivas a que se refiere este capítulo.

Si el autor no tiene facultades de decisión, pero colabora en cualquier forma para el logro de los fines ilícitos de dichas organizaciones, las penas señaladas serán de hasta una mitad.

Si el delito es cometido por servidor público de alguna corporación policial, además de la pena a que se refiere el párrafo anterior, se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión pública e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena impuesta. Si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá, además, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que

pertenezca y se le inhabilitará hasta por un tiempo igual al de la pena impuesta para desempeñar cargo o comisión pública.

Artículo 197.- Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuere la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor de edad o incapaz para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente.

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta una mitad.

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados en el artículo 193.

Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a los labores propios del tiempo, siembra, cultivo o cosecha plantas de marihuana, amapala, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá, prisión de uno a seis años.

Si la pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, constante, la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.

Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no concurren las circunstancias que en ellos se precisan, la pena será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II del dicho artículo. Si falta esa finalidad, la pena será de dos a ocho años de prisión.

Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna corporación policial, se le impondrá, además la destitución del empleo, cargo o comisión pública y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar otro, y si el delito lo cometiese un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá, además de la pena de prisión señalada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión pública.

Artículo 199.- Al farmacodependiente que posea para su consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán informar, de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponda.

Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.

Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad.

Artículo 201.- Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciséis años de edad o bien que no tenga capacidad para comprender el significado de la práctica de la corrupción, o exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, o induzca a la práctica de la mendicidad, la ebriedad, el consumo de narcóticos, a la prostitución, al homosexualismo, a formar parte de una asociación delictiva, o a cometer cualquier delito, se le aplicarán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción el menor o incapaz adquiere los hábitos del alcoholismo, farmacodependencia, se dedique a la prostitución, a prácticas homosexuales, o a formar parte de una asociación delictiva, la pena será de cinco a diez años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa.

Artículo 209.- Al que provoque o facilite cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutara; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio alguno y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que corresponda a la persona de quien se recibe, cargo o puesto.

Artículo 225.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución.

XXI.-

XXVI.- No ordenar la libertad de un procesado, decretando su sujeción a proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa de libertad o alternativa.

Artículo 228.-

Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia; y

Artículo 231.- Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan alguno de los delitos siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

Artículo 249.- Se impondrán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 250.- Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien

II.- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional

a) a c)-

IV.- Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial.

Artículo 284.- Si el amenazador exigió que el amenazado cometiera un delito, a la sanción de la amenaza se acumulará la que le corresponda por su participación en el delito que resulte.

Artículo 286.- La pena será de diez a treinta años de prisión para el que en caminos o carreteras haga uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehículo, ya sea de transporte público o particular.

Artículo 299.- Derogado.
Artículo 303.-
I.-
II.- Se deroga.

Artículo 310.- Se impondrá de dos a siete años de prisión, al que en estado de emoción violenta cause homicidio en circunstancias que atenúen su culpabilidad. Si lo causado fueren lesiones, la pena será de hasta una tercera parte de la que correspondería por su comisión.

Artículo 311.- Derogado.

Artículo 312 bis.- No se procederá contra quien culpablemente ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien que no auxiliare a la víctima.

TITULO DECIMONOVENO
CAPITULO IV

Homicidio en razón del parentesco o relación
Artículo 323.- Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de diez a cuarenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenué la sanción a que se refieren los Capítulos II y III anteriores.

Artículo 324.- Derogado.
Artículo 325.- Derogado.
Artículo 326.- Derogado.

Artículo 336 bis.- Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de

el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años. El juez resolverá la aplicación del producto del trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.

Artículo 340.- Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le impondrán de diez a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u omite prestarle el auxilio necesario cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal.

Artículo 341.- Al que habiendo atropellado a una persona culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere; pudiendo hacerlo se le impondrá de quince a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, independientemente de la pena que proceda por el delito que con el atropellamiento se produce.

Artículo 368.-
I.- El apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se haya por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no medie consentimiento: y

II.- Artículo 387.-
I a IX.-
X.-
Se deroga.

XI a XXII.

Artículo 388.- Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones ó gastos inexistentes o exagerando los reales; ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Artículo 388 bis.- Al que se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.

En caso de quiebra se atenderá a lo previsto por la ley.

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el conreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además "al menos" una o más penas públicas o privadas, o la destitución de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos, y si se tratase de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o inactivo, la baja en el retiro, la baja en la reserva o la baja en el retiro, de reserva o inactivo, que se decretase. Se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos.

MARSHIANA	RESINA DE CANNABIS (HASHICH)	MORFINA	BUPRENORFINA (NUVANE)	CLOMIDATO DE COCAINA	SULFATO DE COCAINA	HEROINA (DIACETILMORFINA)	FENTANIL (ALFA - METIL CHINA-WHITE)	MEPERIDINA (PROMEDEL)	INDICACIONES DE USO CLINICO	FECHA DE PRUEBA	SEÑALAMIENTO	PARA INFORMAR
max 250 grs	max 5 grs	max 150 mg	max 200 mg	max 25 grs	max 250 mg	max 1 gr	max 2 grs	max 3 grs	10 mg en a 1 año 4 mg en a 1 año 2 mg en a 1 año 8 mg en a	1 año a 1 año 8 mg en a 2 años	1 año 3 mg en a 1 año 8 mg en a 2 años 3 mg en a	1 año 9 mg en a 2 años 3 mg en a 2 años 8 mg en a
250 grs a 1 kg	5-20 grs	150-300 mg	200-400 mg	25-50 grs	250-500 mg	1-2 grs	2-4 grs	2-4 grs	1 año 3 mg en a 1 año 8 mg en a 2 años	1 año 3 mg en a 1 año 8 mg en a 2 años 3 mg en a	1 año 3 mg en a 1 año 8 mg en a 2 años 3 mg en a	2 años 3 mg en a 2 años 8 mg en a 3 años 3 mg en a
1 a 2.5 kg	20-50 grs	300-500 mg	400-600 mg	50-100 grs	500 mg-1 g	2-4 grs	4-8 grs	4-8 grs	1 año 9 mg en a 2 años 3 mg en a 2 años 8 mg en a	2 años a 2 años 3 mg en a 2 años 8 mg en a	2 años 3 mg en a 2 años 8 mg en a 3 años 3 mg en a	2 años 8 mg en a 3 años 3 mg en a 3 años 8 mg en a
2.5 a 5 kg	50-100 grs	500-1 grs	800-1 grs	100-200 grs	1-2 grs	4-8 grs	8-16 grs	8-16 grs	2 años 3 mg en a 2 años 8 mg en a 3 años 1 mg en a	2 años 3 mg en a 2 años 8 mg en a 3 años 1 mg en a	2 años 3 mg en a 2 años 8 mg en a 3 años 1 mg en a	3 años 3 mg en a 3 años 8 mg en a 4 años 3 mg en a
5 a 10 kg	100-200 grs	1-2 grs	1-2 grs	200-300 grs	2-3 grs	8-8 grs	16-24 grs	16-24 grs	3 años 3 mg en a 3 años 8 mg en a 4 años 3 mg en a	3 años 3 mg en a 3 años 8 mg en a 4 años 3 mg en a	3 años 3 mg en a 3 años 8 mg en a 4 años 3 mg en a	4 años 3 mg en a 4 años 8 mg en a 5 años 3 mg en a
10 a 20 kg	200-500 grs	2-3 grs	2-4 grs	300-400 grs	3-4 grs	8-10 grs	2-32 grs	2-32 grs	3 años 3 mg en a 3 años 8 mg en a 4 años 3 mg en a	3 años 3 mg en a 3 años 8 mg en a 4 años 3 mg en a	3 años 3 mg en a 3 años 8 mg en a 4 años 3 mg en a	5 años 3 mg en a 5 años 8 mg en a 6 años 3 mg en a
20 a 40 kg	500-800 grs	3-4 grs	4-8 grs	400-500 grs	4-5 grs	10-40 grs	32-40 grs	32-40 grs	4 años 3 mg en a 5 años 3 mg en a 5 años 8 mg en a	4 años 3 mg en a 5 años 3 mg en a 5 años 8 mg en a	4 años 3 mg en a 5 años 3 mg en a 5 años 8 mg en a	6 años 3 mg en a 6 años 8 mg en a 7 años 3 mg en a
40 a 80 kg	800 grs-1.2 kg	4-5 grs	8-10 grs	500g-1 kg	5-20 grs	40-70 grs	40-160 grs	40-160 grs	6 años 3 mg en a 6 años 8 mg en a	6 años 3 mg en a 6 años 8 mg en a	6 años 3 mg en a 6 años 8 mg en a	7 años 3 mg en a 7 años 8 mg en a 8 años 3 mg en a

PERICULOSIDAD (PCP)	MEZCLADURA	ACIDO USEROICO (LSD)	PSILOCIBINA	CLORHIDRATO DE METANFETAMINA (ICE)	MEANFETAMINA	PRINCIPAL INCIPIENCIA	PRINCIPAL INCIPIENCIA	PRINCIPAL INCIPIENCIA	PRINCIPAL INCIPIENCIA
med. 2 grs.	med. 2,5 grs.	med. 50 mg.	med. 2,5 grs.	med. 1,5 grs.	med. 1,5 grs.	10 meses 0	1 año 0	1 año 3 meses 0	1 año 8 meses 0
2-4 grs.	2,5-5 grs.	50 mg.-100 mg.	2,5-5 grs.	1,5-3 grs.	1,5-3 grs.	1 año 0 meses	1 año 0 meses	1 año 0 meses	1 año 0 meses
4-8 grs.	5-10 grs.	100-200 mg.	5-10 grs.	3-5 grs.	3-5 grs.	1 año 0 meses	2 años 0	2 años 0 meses	2 años 0 meses
8-16 grs.	10-20 grs.	200-400 mg.	10-20 grs.	5-10 grs.	5-10 grs.	2 años 0 meses	2 años 0 meses	2 años 0 meses	2 años 0 meses
16-24 grs.	20-30 grs.	400-800 mg.	20-30 grs.	10-20 grs.	10-20 grs.	2 años 0 meses	3 años 1 meses	3 años 1 meses	3 años 1 meses
24-32 grs.	30-40 grs.	600-800 mg.	30-40 grs.	20-40 grs.	20-40 grs.	3 años 0 meses	3 años 10 meses	4 años 3 meses	4 años 3 meses
32-40 grs.	40-50 grs.	800 mg.-1 g.	40-50 grs.	40-60 grs.	40-60 grs.	4 años 0 meses	4 años 0 meses	5 años 3 meses	5 años 3 meses
40-100 grs.	80-100 grs.	1-4 grs.	80-100 grs.	60-80 grs.	60-80 grs.	5 años 0 meses	5 años 10 meses	7 años 3 meses	7 años 3 meses

[illegible]

[illegible]

ARTÍCULO SEGUNDO.- Del Código Federal de Procedimientos Penales, se reformatan los siguientes artículos 2, 3, 4 párrafo segundo, 6 párrafo primero, 15, 36 párrafo primer, 38 párrafo primero, 40 párrafo primero, 41 párrafo primero, 123 párrafo primero, 126, 128, 132, 134, 141 párrafo primero, 147, 149, 152, 155, 157, 161 párrafo primero, 163 párrafo primero, 169, 170, 180, 193, 194, 198, 202, 233, 235, 242 párrafo segundo, 249 párrafo segundo, 265, 287 fracción II, 288 párrafo primero, 290 párrafo primero, 399, 400, 402 párrafo primero, 416 párrafo primero, 419 párrafo primer, 416, 427 fracción I, 434, 474 y 483, 581, y se modifica la denominación del artículo 123, en los términos siguientes:

Víctima Quinto; se adiciona un párrafo último al artículo 1, los párrafos segundo y tercero al artículo 10, un párrafo segundo al artículo 16 reconocidos como víctimas, el párrafo primero al artículo 123 pasando a ser los párrafos tercero y cuarto, un tercer párrafo al artículo 123, un párrafo tercero al artículo 126, un párrafo primero al artículo 128, un párrafo segundo al artículo 138, tres párrafos al artículo 163, un artículo 164 bis, un tercer párrafo al artículo 169, un párrafo al artículo 287, un tercer párrafo al artículo 296, una fracción VII al artículo 288, una fracción III bis al artículo 367, una fracción VII bis al artículo 388, una fracción VIII al artículo 399, una fracción VI bis al artículo 402, una fracción V bis al artículo 404, una fracción IV bis al artículo 406, una fracción III bis al artículo 416, una fracción II bis al artículo 419, una fracción I bis al artículo 427, una fracción X al artículo 434, una fracción IX al artículo 474, una fracción VIII al artículo 483, una fracción VII al artículo 485, una fracción VI al artículo 490, una fracción V al artículo 492, una fracción IV al artículo 495, una fracción III al artículo 498, una fracción II al artículo 500, una fracción I al artículo 502.

Para quedar como sigue,

1.- **Artículo 1.-** Si en cualquiera de esos procedimientos algún sujeto capaz se ve relacionado con los hechos objeto de ellos, sea como autor o participe, testigo, víctima u ofendido, o con cualquier otro carácter, el Ministerio Público o el tribunal respectivo suplarán la falta de la víctima o de la autoridad judicial por los fundamentos que conduzcan a proteger los derechos que legítimamente puedan ser afectados.

2.- **Artículo 2.-** Compete al Ministerio Público General llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales de justicia del delito.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

- I.- Recibir las denuncias, acusaciones o querrelas que se presenten en forma oral o por escrito sobre hechos que puedan constituir delito;
- II.- Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos del tipo penal y a la demostración de la probable responsabilidad del inculcado, así como a la averiguación de los hechos;
- III.- Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la averiguación previa, así como las órdenes de castigo que procedan;
- IV.- Acordar la detención o retención de los indicados cuando así proceda;
- V.- Solicitar a las autoridades y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas;
- VI.- Acordar o restituir al ofendido en sus derechos en los términos del artículo 38;

desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar a efecto el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro.

Artículo 15.- Las actuaciones se podrán practicar a toda hora y aun en días inhábiles, sin necesidad de previa habilitación y en cada una de ellas se expresarán el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se practiquen; en ellas se usará el idioma castellano, salvo las excepciones en que la ley permita el uso de otro, en cuyo caso se recabará la traducción correspondiente, y en el acta que se levante se asentará únicamente lo que sea necesario para constancia del desarrollo que haya tenido la diligencia.

Artículo 16.- Las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpa-do, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según correspon-da.

Artículo 36.- Todos los gastos que se originen en las diligencias de averiguación previa, en las acordadas por los tribunales a solicitud del Ministerio Público, y en las decretadas de oficio por los tribunales, serán cubiertos por el erario federal.

Artículo 38.- Cuando en las actuaciones estén acreditados los elementos que integren el tipo del delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de éstos, siempre que estén legalmente comprobados. Si se tratara de cosas, únicamente podrán obtenerse, estén o no comprobados, los elementos del tipo del delito, cuando a juicio de quien practique las diligencias, la retención fuere necesaria para la debida integración de la averiguación.

Artículo 45.- Las diligencias de averiguación previa que deban practicarse fuera del lugar en que se esté tramitando alguna averiguación, se encargarán a quien toque desempeñar esas funciones en el lugar donde deban practicarse, enviándole la averiguación original o un oficio con las inserciones necesarias.

Artículo 51.- Derogado.
Artículo 52.- Derogado.
Artículo 95.-

IV.- Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.

VII.- Determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal;

VIII.- Acordar y notificar al ofendido o víctima el ejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen:

X.- En caso procedente promover la conciliación de las partes; y

XI.- Las demás que señalen las leyes.

Artículo 3.- La Policía Judicial Federal actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro del periodo de averiguación previa, la policía Judicial Federal está obligada a:

1.- Recibir las denuncias sobre hechos que puedan constituir delitos del orden federal, sólo cuando debido a las circunstancias del caso en que éstos ocurran, no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que la Policía Judicial federal informará de inmediato acerca de las mismas y de las diligencias practicadas. Las diversas policías, cuando actúen en auxilio del Ministerio Público Federal, inmediatamente darán aviso a éste, dejando de actuar cuando él lo determine;

II.- Practicar, de acuerdo con las instrucciones que le dicte el Ministerio Público Federal, las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la averiguación previa:

III.- Llevar a cabo las citaciones, notificaciones y representaciones que el Ministerio Público Federal

IV.- Realizar todo lo demás que señalen las

En el ejercicio de la función investigadora a que se refiere este artículo, queda estrictamente

Prohibido a la Policía Judicial Federal recibir declaraciones del indiciado o detener a alguna persona, fuera de los casos de flagrancia, sin que medie instrucciones escritas del Ministerio Público, el juez o del tribunal.

Artículo 4.- Durante estos procedimientos, el Ministerio

El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la Policía Judicial bajo el mando de aquél, ejercerán, en su caso, también las funciones que señala la fracción II del artículo 2; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones que aquéllos se cumplan.

Artículo 6.- Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.

Artículo 10.-
En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

También será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculcado y a otras que impidan garantizar e

e aquéllos, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes:

1. 
 II.
 III. 
 IV.
 V. 
 VI.
 VII. 
 VIII.
 IX. 
 X.
 XI. 
 XII.
 XIII. 
 XIV. 
 XV.
 XVI. 
 XVII.
 XVIII. 
 XIX.
 XX. 
 XXI.
 XXII. 
 XXIII.
 XXIV. 
 XXV.
 XXVI. 
 XXVII. 
 XXVIII.
 XXIX. 
 XXX.
 XXXI. 
 XXXII.
 XXXIII. 
 XXXIV.
 XXXV. 
 XXXVI.
 XXXVII. 
 XXXVIII.
 XXXIX. 
 XL. 
 XLI.
 XLII. 
 XLIII.
 XLIV. 
 XLV.
 XLVI. 
 XLVII.
 XLVIII. 
 XLIX.
 L. 
 LI. 
 LII.
 LIII. 
 LIV.
 LV. 
 LVI.
 LVII. 
 LVIII.
 LVIX. 
 LX.
 LXI. 
 LXII.
 LXIII. 
 LXIV. 
 LXV.
 LXVI. 
 LXVII.
 LXVIII. 
 LXIX.
 LXX. 
 LXXI.
 LXXII. 
 LXXIII.
 LXXIV. 
 LXXV.
 LXXVI. 
 LXXVII. 
 LXXVIII.
 LXXIX. 
 LXXX.
 LXXXI. 
 LXXXII.
 LXXXIII. 
 LXXXIV.
 LXXXV. 
 LXXXVI.
 LXXXVII. 
 LXXXVIII. 
 LXXXIX.
 XL. 
 XLI.
 XLII. 
 XLIII.
 XLIV. 
 XLV.
 XLVI. 
 XLVII.
 XLVIII. 
 XLIX.
 L. 
 LI. 
 LII.
 LIII. 
 LIV.
 LV. 
 LVI.

CAPITULO II

Artículo 123.- Inmediatamente que el Ministerio Público Federal o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad a las víctimas; impedir que se destruyan o alteren las pruebas, los vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos, evaluar si el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación procediendo a la detención de los que intervienen en su comisión en los casos de delito flagrante.

El Ministerio Público sólo podrá ordenar la detención de una persona, cuando se trate de delito flagrante o de caso urgente, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución y en los términos de los artículos 193 y 194 respectivamente.

Artículo 126.- Cuando una autoridad auxiliar del Ministerio Público practique con ese carácter diligencias de averiguación previa, remitirá a éste, dentro de los tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione. Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observará lo previsto en los artículos 125 y 127.

Artículo 128.- Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá inmediatamente en la siguiente forma:

1.- Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido; la hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el número y el largo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad dependiente del Ministerio Público, se asentará o se agregará, en su caso, la información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado y la fecha en que el detenido fue recibido al detenido;

II.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante.

III.- Se le harán saber los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en materia de sujeción a la ley, le otorgan a los extranjeros residentes en el país, de acuerdo con lo siguiente:

a) No declarar si así lo desea, o en contrario, a declarar asistido por su defensor,

b) Tener una defensa adecuada por abogado o por persona de su confianza, o si quisiere o no pudiere designar defensor, designará desde luego un defensor de oficio.

d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación para la cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa.

e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda. Concediéndose al inculcado el derecho de comparecer siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el comparecencia, ofrezca por el inculcado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas y.

f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo segundo del artículo 135 de este Código.

g) Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al inculcado comunicarse con las personas que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes.

h) De la información al inculcado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las actuaciones.

IV.- Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratase de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que correspondiera.

V.- En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión.

Artículo 132.- En la práctica de diligencias de averiguación previa se aplicarán en lo conducente las disposiciones del Título Sexto de este código.

Artículo 134.- En cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado los elementos del tipo penal del delito y la probable responsabilidad del inculcado, en los términos del artículo 168, el Ministerio Público ejercerá la acción penal ante los tribunales, para que el juzgador ordene de orden de aprehensión, se ajustarán a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional y en el 195 del presente Código.

Si el ejercicio de la acción penal es con detenido, el tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato el asunto, y se entenderá que el inculcado queda a disposición del juzgador, para que los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que el Ministerio Público lo interne en el reclusorio o centro de salud correspondiente. El Ministerio Público dejará constancia de que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, entregará copia de aquélla al encargado del reclusorio o del centro de salud, quien asentará el día y la hora de la recepción.

El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la detención fue apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no, en el primer caso

ratificará la detención y en el segundo decretará la libertad con las reservas de ley.

En caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados en el artículo 16 de la Constitución Política citada, se presumirá que estuvo incomunicada y las declaraciones que haya emitido el inculcado no tendrán validez.

En el pleito de consignación, el Ministerio Público hará expreso señalamiento de los datos reunidos durante la averiguación previa que, a su juicio, puedan ser considerados para los efectos previstos en el artículo 20 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los preceptos de este Código relativos a la libertad provisional bajo caución, tanto en lo referente a la determinación del tipo penal, como por lo que respecta a los elementos que deban tomarse en cuenta para fijar el monto de la garantía.

Artículo 135.- Al recibir el Ministerio Público Federal diligencias de averiguación previa, si hubiere detención y la detención fuere justificada, hará inmediatamente la consignación a los tribunales, si se cumplen los requisitos a que se refiere el párrafo primero del artículo 134; si tales requisitos no se satisficieren, podrá ordenar ajustándose a lo previsto en los artículos 193, 194 y 194 bis. Si la detención fuere injustificada, ordenará que los detenidos queden en libertad.

Artículo 135 Bis.- Cuando el inculcado en la libertad sin caución alguna, por el Ministerio Público, o por el juez, cuando el término medio aritmético de la pena de prisión no exceda de tres años, siempre que:

I.- No exista riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia;

II.- Tenga domicilio fijo con antelación no menor de tres meses de la fecha de la residencia de la autoridad que conozca del caso;

III.- Tenga un trabajo fijo; y

IV.- Que el inculcado no haya sido condenado por delito intencional.

La presente disposición no será aplicable cuando se trate de los delitos graves señalados en este Código.

Artículo 138.- También se sobreseerán los procedimientos concernientes a delitos culposos que sólo produzcan daño en propiedad ajena y/o lesiones de los miembros de los artículos 283 y 290 del Código Penal, si se cubre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido y el inculcado no haya abandonado a aquélla ni haya actuado hallándose en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o psicotrópicos. Lo anterior no se concederá cuando se trate de culpa que se califique de grave conforme a la parte conducente del artículo 60 del Código Penal.

Artículo 141.- En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a:

I.- Recibir asesoría jurídica y ser informado, cuando lo solicite, del desarrollo de la averiguación previa o del proceso;

II.- Concurrir con el Ministerio Público;

III.- La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o, en su caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido;

IV.- La forma de intervención de los sujetos activos y.

V.- La realización dolosa o culpable de la acción u omisión.

Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere, a) las calidades del sujeto activo y del pasivo, b) el resultado y su atribución a la acción u omisión, c) el objeto material, d) los medios utilizados, e) las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, f) los elementos normativos de la acción y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son los siguientes:

Artículo 168.- El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculcado, como base de la acción de la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son los siguientes:

Artículo 169.- Cuando se trate de lesiones, el inculcado, la autoridad debe constatar si no existe acreditada en favor de aquél alguna causa de eximente y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad.

Los elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilidad se acreditará por cualquier medio probatorio que señale la ley.

Artículo 169.- Cuando se trate de lesiones, además éstas serán objeto de inspección con asistencia de peritos médicos, describiéndolas pormenorizadamente y se recabará dictamen de aquellos peritos, que las describa y las clasifique en orden a su naturaleza, gravedad, causas y cualquier otra circunstancia atendible para ese fin.

Artículo 170.- En el caso de lesiones internas, envenenamiento u otra enfermedad proveniente del delito, además de cualesquiera de otras diligencias que resulten procedentes, se practicará inspección haciéndose constar las manifestaciones exteriores que presentare la víctima y se recabará el dictamen pericial en que se expresaran las mismas, que se presente, si existen esas lesiones y si han sido producidas por una causa externa. En caso de no existir manifestaciones exteriores, se hará constar esta circunstancia, agregándose el dictamen pericial.

Artículo 171.- Si se tratase de homicidio, además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará la inspección del cadáver, describiéndole minuciosamente y se recabará el dictamen de los peritos médicos, quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guardare el cadáver, las causas que originaron la muerte. Si hubiere sido sepultado, se procederá a exhumarlo.

Artículo 172.- En los casos de homicidio, además de las diligencias mencionadas en los artículos 171 y 172, así como de

cualquiera otra que resulten pertinentes, en el primer, también reconocerán los peritos médicos a la madre, describirán las lesiones que presente y dictaminarán sobre la causa del aborto. En uno u otro caso expresarán la edad de la víctima, si nació viable y todo aquello que pueda servir para fijar la naturaleza del delito.

Artículo 174.- Derogado.

Artículo 175.- Derogado.

Artículo 176.- Tratándose del delito a que se refiere la fracción II del artículo 368 del Código Penal, cuando, sin previo contrato con una empresa de energía eléctrica, de gas, o de cualquier fluido, se encuentre conectada a una instalación particular a las tuberías o líneas de la empresa respectiva, o a cualquier tubería o líneas particulares conectadas a las tuberías o líneas de dicha empresa, en la inspección que se practique, con asistencia de peritos en la materia, se harán constar estas circunstancias y se recabará el dictamen pericial que las describa y además precise la naturaleza del fluido de que se trate y cuantifique, en lo posible, la cantidad de fluido que haya sido consumido mediante la conexión de que se trate.

Artículo 177.- Derogado.

Artículo 178.- Derogado.

Artículo 179.- Cuando tratándose de delito de ataques a las vías de comunicación, no fuere posible practicar inspección porque para evitar perjuicios al servicio público haya sido necesario repararlas inmediatamente, se practicarán inspección de las huellas u otros signos que constituyan posibles indicios de la existencia del hecho inculcado y de la antigüedad y extensión de la reparación, por el Ministerio Público, y se recabará dictamen de los peritos en la materia, se harán constar estas circunstancias y se recabará el dictamen pericial que las describa y además precise la naturaleza del fluido de que se trate y cuantifique, en lo posible, la cantidad de fluido que haya sido consumido mediante la conexión de que se trate.

Artículo 180.- Para la comprobación de los elementos del tipo penal y de la probable responsabilidad del inculcado, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.

Artículo 181.-

Artículo 182.-

Artículo 183.-

Artículo 184.-

Artículo 185.-

Artículo 186.-

Artículo 187.-

Artículo 188.-

Artículo 189.-

Artículo 190.-

Artículo 191.-

Artículo 192.-

Artículo 193.-

Artículo 194.-

Artículo 195.-

Artículo 196.-

Artículo 197.-

Artículo 198.-

Artículo 199.-

Artículo 200.-

Artículo 201.-

Artículo 202.-

Artículo 203.-

Artículo 204.-

Artículo 205.-

Artículo 206.-

Artículo 207.-

Artículo 208.-

Artículo 209.-

Artículo 210.-

Artículo 211.-

Artículo 212.-

Artículo 213.-

Artículo 214.-

El lugar, notificándolo al Ministerio Público Federal y a su defensor.

Artículo 198.- Los miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que estuvieren detenidos o sujetos a prisión preventiva deberán estar en las prisiones especiales, si existieren, o en su defecto de las comunes. Lo anterior no será aplicable para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas que se encuentren en dicha situación por encontrarse siguiendo un proceso penal por la comisión de un delito en contra de la salud, en cualesquiera de sus modalidades.

No podrán considerarse prisiones especiales los cuarteles u oficinas.

Artículo 202.- Al ser aprehendido un empleado o servidor público o un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se comunicará la detención sin demora al superior jerárquico respectivo. También será notificado dicho superior jerárquico cuando el empleado o servidor público o el miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se le dicte sentencia definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria en cualquiera de sus formas, remitiéndole el juzgador copia certificada de la misma.

Artículo 233.- El funcionario que practique las diligencias y las partes, podrán hacer a los peritos las preguntas que resulten pertinentes sobre la materia objeto de la pericia; les dará por escrito o de palabra, pero sin sugerir algn dato, los datos que favorezcan y hará constar estos hechos en el acta respectiva.

Artículo 235.- Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo ratificarán en diligencia especial. Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes, sino que el funcionario que practique las diligencias lo estime necesario. En esta diligencia el juez y las partes podrán formular preguntas a los peritos.

Artículo 242.- El juez o tribunal desahará únicamente las preguntas que sean objetadas por impertinentes o inconducentes para los fines del proceso. El desahogo de desahogo será revocable. En todo caso el testigo dará razón de su dicho. Si el testigo no comparece a la primera citación, sin causa justificada, el juez ordenará que sea presentado a declarar.

Artículo 249.- El Ministerio Público, el inculcado, el defensor, la víctima u ofendidos, tendrán derecho de interponer al testigo, el cual se celebrará en la forma de desahogo de las preguntas que a su juicio o por objeción de parte sean señaladas como impertinentes o inconducentes y, además, podrá interponer al testigo sobre los puntos que estime convenientes.

Artículo 255.- Con excepción de los mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que sólo se celebrará si el procesado o su defensor lo solicita, los cargos se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción.

Artículo 279.- Se deroga.

Artículo 287.- Se deroga.

Conclusiones fueron de las contempladas en el artículo 294, se suspenderá la audiencia y se estará en lo previsto en el artículo 295.

Se deroga.

Artículo 367.- Se deroga.

Artículo 368.- Se deroga.

Artículo 369.- Se deroga.

Artículo 370.- Se deroga.

Artículo 371.- Se deroga.

Artículo 372.- Se deroga.

Artículo 373.- Se deroga.

Artículo 374.- Se deroga.

Artículo 375.- Se deroga.

Artículo 376.- Se deroga.

Artículo 377.- Se deroga.

Artículo 378.- Se deroga.

Artículo 379.- Se deroga.

Artículo 380.- Se deroga.

Artículo 381.- Se deroga.

Artículo 382.- Se deroga.

Artículo 383.- Se deroga.

Artículo 384.- Se deroga.

Artículo 385.- Se deroga.

Artículo 386.- Se deroga.

Artículo 387.- Se deroga.

Artículo 388.- Se deroga.

Artículo 389.- Se deroga.

Artículo 390.- Se deroga.

Artículo 391.- Se deroga.

Artículo 392.- Se deroga.

Artículo 393.- Se deroga.

Artículo 394.- Se deroga.

Artículo 395.- Se deroga.

Artículo 396.- Se deroga.

Artículo 397.- Se deroga.

Artículo 398.- Se deroga.

Artículo 399.- Se deroga.

Artículo 400.- Se deroga.

Artículo 401.- Se deroga.

Artículo 402.- Se deroga.

II.- Que sea hecha ante el Ministerio Público o el Tribunal de la causa, con la asistencia de su defensor o persona de su confianza, y que el inculcado esté debidamente informado del procedimiento del proceso.

III.- IV.-

Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Judicial Federal o local, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en aquellas.

Artículo 294.- Si las conclusiones fueren de no acusación, el juez o tribunal las enviará con el proceso al Procurador General de la República, para los efectos del artículo 295.

Se tendrán por conclusiones no acusatorias, aquellas en las que no se concrete la pretensión punitiva, o bien, ejercitándose ésta, se omita acusar.

a) Por algún delito expresado en el auto de formal prisión; o

b) persona respecto de quien se abrió el proceso.

Artículo 296.-

Si las conclusiones acusatorias definitivas se refieren a delito cuya punibilidad no señale pena de prisión o la señale alternativa con otra no privativa de libertad, el juez pondrá en inmediata libertad al acusado, advirtiéndole que queda sujeto al proceso para su continuación hasta sentencia ejecutoriada.

Artículo 298.-

I a VII.-

VIII.- En cualquier otro caso que la ley señale;

En segunda instancia el sobreseimiento procederá de oficio o a petición de parte, sólo en el caso de la fracción III de este artículo, o cuando alguna de las partes lo promueva exhibiendo pruebas supervenientes que acrediten la inocencia del encausado.

Artículo 314.- En la audiencia podrán interponer al acusado sobre los hechos materia del juicio, el juez, el Ministerio Público y la defensa. Podrán repetirse las diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, siempre que fueren necesarias y posible a juicio del tribunal, y si hubieren sido solicitadas por las partes, a más tardar al día siguiente en que se notificó el auto citando a la audiencia. Se dará lectura a las constancias que las partes señalen; y después de oír los alegatos de las mismas, se declarará visto el proceso, con lo que terminará la diligencia, salvo que el juez, oyendo a las partes, considere conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez.

Contra la resolución que niegue o admita la repetición de las diligencias de prueba, no cabe a nueva audiencia, no procede recurso alguno.

Artículo 307.- Cuando se esté en los casos a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 306, la audiencia principal será presentada al Ministerio Público sus conclusiones y justificándolas a continuación la defensa. Si aquéllas fueren acusatorias, se seguirá el procedimiento señalado en el artículo anterior, dictándose la sentencia en la misma audiencia o dentro de los cinco días siguientes a ésta. Si las

Las garantías a que se refieren las fracciones I y II del artículo 399 sólo podrán ser reducidas en los términos expuestos en el primer párrafo del presente artículo, cuando se verifique la circunstancia señalada en la fracción III de este artículo. En este caso, si se llegare a acreditar que para obtener la reducción el inculcado simuló su insolvencia, o bien, que con posterioridad a la reducción de la fianza recuperó su capacidad económica para cubrir los montos de las garantías inicialmente señaladas, de no restituirlas éstas en el plazo que el juez señale para ese efecto, se le revocará la libertad provisional que tenga concedida.

Artículo 402.- El monto de la caución relacionada con la fracción tercera del artículo 399, deberá ser asegurable por el inculcado y se fijará tomando en cuenta:

I a V.-

Se deroga.

Artículo 412.- Cuando el inculcado haya garantizado por sí mismo su libertad con depósito, fianza, hipoteca o fideicomiso, aquélla se le revocará en los casos siguientes:

I a V.-

Se deroga.

Artículo 414.- Cuando el inculcado haya garantizado su libertad del inculcado por medio de depósito en efectivo, de fianza, hipoteca o fideicomiso, aquélla se revocará:

I a IV.-

V.- En el caso señalado en la parte final del último párrafo del artículo 400.

Artículo 413.- Cuando un tercero haya garantizado la libertad del inculcado por medio de depósito en efectivo, de fianza, hipoteca o fideicomiso, aquélla se revocará:

I a IV.-

V.- En el caso señalado en la parte final del artículo 400.

Artículo 416.- Cuando un tercero haya constituido depósito, fianza, hipoteca o fideicomiso, para garantizar la libertad de un inculcado, las ordenes para que comparezca éste se entenderán con aquél. Si no pudiere desde luego presentarlo, el tribunal podrá otorgarle un plazo para que comparezca, pero no podrá ser superior de liberar orden de aprehensión si lo estima oportuno. Si concluido el plazo concedido no se obtiene la comparecencia del inculcado, se ordenará su aprehensión y se hará efectiva la garantía en los términos del primer párrafo del artículo 414.

Artículo 422.-

I.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión, se constatare plenamente desvanecidos los datos que sirvieran para comprobar los elementos del tipo del delito.

Artículo 434.- La inhibitoria se intentará ante el tribunal a quien se crea competente para que se abra el conocimiento del asunto, pero nunca se podrá intentar para que deje de conocer el juez cuya competencia se haya establecido por razones de alta seguridad.

Artículo 436.- No procederá la acumulación si se trata de diversos delitos, excepto lo previsto por el artículo 10, párrafo segundo y tercero.

Artículo 433.- El juez que conozca de un proceso seguido contra varios sujetos, ordenará la separación de procesos cuando alguno de aquéllos solicite el cierre de la instrucción, en tanto que otro se oponga a ello.

Artículo 434.- Derogado.

Artículo 435.- Derogado.

Artículo 436.- Derogado.

Artículo 437.- Derogado.

Artículo 438.- Derogado.

Artículo 439.- Derogado.

Artículo 440.- Derogado.

Artículo 441.- Derogado.

Artículo 442.- Derogado.

Artículo 443.- Derogado.

Artículo 444.- Derogado.

Artículo 445.- Derogado.

Artículo 446.- Derogado.

Artículo 447.- Derogado.

Artículo 448.- Derogado.

Artículo 449.- Derogado.

Artículo 450.- Derogado.

Artículo 451.- Derogado.

Artículo 452.- Derogado.

Artículo 531.- Pronunciada una sentencia ejecutoriada condenatoria o absolutoria el juez o el tribunal que las pronuncie expedirá dentro de cuarenta y ocho horas, una copia certificada para la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con los datos de identificación del reo. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de cinco a quince días de salario mínimo.

El juez está obligado a dictar de oficio, todas las providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposición de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo.

Artículo 549.- Derogado.

Artículo 550.- Derogado.

Artículo 551.- Derogado.

Artículo 552.- Derogado.

ARTÍCULO 553.- Del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal se reforman los artículos 3 fracciones I y II, 4, 9, 10 párrafo tercero, 11 fracciones II y III, 13, 14 primer párrafo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 párrafo primero, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Artículo 549.- Derogado.

Artículo 550.- Derogado.

Artículo 551.- Derogado.

Artículo 552.- Derogado.

Artículo 553.- Derogado.

Artículo 554.- Derogado.

Artículo 555.- Derogado.

Artículo 556.- Derogado.

Artículo 557.- Derogado.

Artículo 558.- Derogado.

Artículo 559.- Derogado.

Artículo 560.- Derogado.

Artículo 561.- Derogado.

justo según el caso, y por el respectivo secretario, en los dos últimos casos, y llevarán además, el sello de la autoridad correspondiente.

Artículo 43.- En casos urgentes se podrá usar telegrama, teléfono o cualquier otro medio de comunicación; en el mensaje se expresarán con toda claridad la diligencia de que se trate, los nombres de los litigantes, el fundamento de la providencia y el aviso de que se mandará el oficio de colaboración, exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje.

Artículo 47.- Los oficios de colaboración, exhortos y requisitorias que se reciban en el Distrito Federal se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y se despacharán dentro de tres días, a no ser que las diligencias que se hayan de practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso el Ministerio Público o el juez fijarán el que crean conveniente.

Artículo 49.- Derogado.

Artículo 53.- Cuando el Ministerio Público o el juez no puedan dar cumplimiento al oficio de colaboración, exhorto o requisitoria, según el caso, por hallarse en otra circunscripción territorial las personas o los bienes que sean objeto de la diligencia, lo remitirán al Ministerio Público o al juez del lugar en que aquélla o éstos se encuentren y lo harán saber al remitente.

Artículo 54.- No se notificarán las providencias que se dicten para el cumplimiento de un oficio de colaboración, de un exhorto o de una requisitoria, sino cuando se prevenga así en el mismo despacho.

Artículo 55.- Cuando se demore en el Distrito Federal el cumplimiento de un oficio de colaboración, de un exhorto o de una requisitoria, se recordará su despacho por medio de oficio. Si a pesar de éste continuare la demora, la autoridad requerida lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del requerido, el cual ordenará al moroso, lo obligará a cumplir el oficio de colaboración, exhorto o requisitoria y le exigirá la responsabilidad en que hubiere incurrido.

Se deroga.

Artículo 58.- Los plazos se contarán por días hábiles, excepto los casos a que se refiere el artículo anterior y a cualquier otro que por disposición legal vigente se establezca, pues éstos se contarán de momento a momento.

Artículo 60.- Todos los que asistan a la audiencia estarán con la cabeza descubierta, con respeto y en silencio, quedando prohibido dar señales de aprobación o desaprobación y extorcer o manifestar opiniones sobre la culpabilidad del inculcado o acusado sobre las pruebas que rindan o sobre la conducta de algunos de los que intervienen en el procedimiento. El transgresor será amonestado; si reincidiere, se le expulsará del local donde la audiencia se celebre, y si se resiste a salir o vuelve al lugar, se le impondrá como corrección disciplinaria multa hasta de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 63.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 64.- Si el defensor perturbase el orden o injuriase u ofendiese a alguna persona, se le aprehenderá, y si reincidiere, se le mandará expulsar, acto seguido se le hará saber al inculcado que tiene derecho a nombrar otro defensor y en caso de no hacerlo se le designará uno de oficio.

Artículo 66.- El inculcado, durante la audiencia, sólo podrá comunicarse con sus defensores, sin poder dirigir la palabra al juez.

Artículo 67.- En las audiencias que se celebren ante la autoridad judicial, o ante el Ministerio Público, la policía de ellas estará a cargo de éstos, y las que tengan lugar ante los tribunales, a cargo del magistrado que las presida, pudiendo aquéllos y éste imponer las correcciones a que esté código se refiere.

Artículo 69.- En todas las audiencias el inculcado podrá defenderse por sí mismo o por las personas que él nombre libremente.

Artículo 70.- El juez o presidente de la audiencia, o el Ministerio Público, según el caso, preguntarán siempre al inculcado, antes de cerrar la misma, si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.

Artículo 72.- Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

Artículo 73.- La víctima o el ofendido o su representante puede comparecer en la audiencia y alegar lo que a su derecho convenga, en las mismas condiciones que los defensores.

Artículo 74.- Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

Artículo 75.- Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

Artículo 76.- Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

Artículo 77.- Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

Artículo 78.- Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

Artículo 79.- Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

Artículo 80.- Todas las resoluciones apelables deberán ser notificadas al Ministerio Público, al procesado, a la víctima u ofendido del delito, o al coadyuvante del Ministerio Público, en su caso, y al defensor o cualquiera de los defensores, si hubiere varios.

Artículo 82.- Todas las personas que por algún motivo legal intervengan en un procedimiento penal, deberán designar, desde la primera diligencia en que intervengan, domicilio ubicado en el Distrito Federal, para que se les hagan las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedieren, e informar de los cambios de domicilio.

Artículo 84.- Si no complieren con esta prevención, las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos se tendrán por bien hechos, por el juez.

Artículo 86.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 88.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 90.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 92.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 94.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 96.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 98.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 100.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 102.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 104.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 106.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 108.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 110.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 112.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 114.- Si el inculcado faltase o injuriase a alguno de los que intervienen en la audiencia o cualquiera otra persona, se le mandará sacar del lugar donde aquélla se celebra, conculándola sin él, pudiendo imponerse, por lo que precede, la multa de corrección disciplinaria, hasta diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Ministerio Público y el juez gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no sean los que los define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta.

Artículo 126.- Si la persona lesionada o enferma hubiere de estar detenida o retenida, su curación deberá tener lugar precisamente en los hospitales públicos y excepcionalmente en sanatorios particulares, cuando la naturaleza de la enfermedad y las disposiciones de esta ley lo permitan.

CAPITULO III

Aprehensión, detención o comparecencia del inculcado

Artículo 132.- Para que un juez pueda librar orden de aprehensión, se requiere:

I.- Que el Ministerio Público la haya solicitado; y

II.- Que se reúnan los requisitos fijados por el artículo 16 de la Constitución Federal.

Artículo 133.- En los casos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 271 de este código, y en todos aquellos en que el delito no da lugar a aprehensión, a pedimento del Ministerio Público se librará la orden de comparecencia en contra del inculcado para que rinda su declaración preparatoria, siempre que estén acreditados los elementos del tipo y la probable responsabilidad del inculcado.

La orden de comparecencia y la de aprehensión se entregarán al Ministerio Público.

Artículo 133 Bis.- Se concederá al inculcado la libertad sin caución alguna, por el Ministerio Público, o por el juez, cuando el término medio aritmético de la pena de prisión no exceda de tres años, siempre que:

I.- No exista riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia;

II.- Tenga domicilio fijo en el Distrito Federal o en la zona conurbada con antelación no menor de un año;

III.- Tenga un trabajo lícito; y

IV.- Que el inculcado no haya sido condenado por delito intencional.

La presente disposición no será aplicable cuando se trate de delitos graves señalados en este Código.

Artículo 134.- Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al aprehendido, sin dilación, a disposición del juez respectivo, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó, y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor.

En caso de que la detención de una persona exceda de los plazos señalados en el artículo 16 de la Constitución Federal, se presumirá que estuvo incomunicada y las declaraciones que haya emitido el detenido no tendrán validez.

Artículo 134 Bis.- El Ministerio Público evitará que el probable responsable sea incomunicado, intimidad o torturado. En los lugares de detención del Ministerio Público estará instalado un aparato telefónico para que los detenidos puedan comunicarse con quien lo estimen conveniente.

Los indicados, desde la averiguación previa podrán nombrar abogado o persona de su confianza que se encargue de su defensa. A falta de

una u otro, el Ministerio Público le nombrará uno de oficio.

Artículo 135.- La ley reconoce como medios de prueba:

I.-

II.-

III.-

IV.- La Inspección ministerial y la judicial.

V.-

VI.-

Se admitirá como prueba en los términos del artículo 20 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, a juicio del Ministerio Público, juez o tribunal. Cuando el Ministerio Público o la autoridad judicial lo estimen necesario podrán, por algún otro medio de prueba, establecer su autenticidad.

CAPITULO IV

Confesión

Artículo 136.- La confesión es la declaración voluntaria hecha por persona no menor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante el Ministerio Público, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 137.- La confesión es admisible en cualquier estado del proceso, hasta antes de pronunciarse la sentencia definitiva.

Artículo 138.- Derogado.

CAPITULO V

Inspección y reconstrucción de hechos

Artículo 139.- La Inspección puede practicarse de oficio o a petición de parte, pudiendo concurrir a ella los interesados y hacer las observaciones que estimen oportunas.

Artículo 140.- El Ministerio Público o el juez, al practicar la Inspección procurarán estar asistidos de los peritos que deban emitir, posteriormente, su dictamen sobre los lugares u objetos inspeccionados.

Artículos 141.- A juicio del Ministerio Público o del juez, o a petición de parte, se levantarán los planos o se tomarán las fotografías que fueren conducentes. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella hubieren intervenido.

Artículo 142.- En caso de lesiones, al sanar el herido, el Ministerio Público, los jueces o los tribunales según el caso, darán fe de las consecuencias que hayan dejado aquéllas y sean visibles, practicando inspección, de la cual se levantará acta respectiva.

Artículo 144.- La Inspección podrá tener el carácter de reconstrucción de hechos y tener por objeto apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales que se hayan formulado; se practicará dentro de la averiguación previa únicamente cuando el Ministerio Público o el juez, o a petición de parte, considere que practique las diligencias lo estime necesario; en todo caso, deberá practicarse cuando ya esté terminado la instrucción, siempre que la naturaleza del hecho delictuoso, cometido, o los hechos de la averiguación previa, así lo exijan, a juicio del juez o tribunal. También podrá practicarse durante la vista del proceso o la audiencia del jurado, cuando el juez o

publicación en lugar visible del tribunal o de la agencia del Ministerio Público, sin perjuicio de las medidas que éstos tomen para que pueda continuarse el procedimiento.

Artículo 83.- Los servicios públicos del Poder Judicial, a quienes la ley encomienda hacer las notificaciones, las practicarán personalmente, asentando el día y hora en que se verifiquen, leyendo íntegra la resolución al notificado, y asistiendo del traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano. Se le dará copia de la resolución al interesado, si lo solicita.

Artículo 85.- Cuando el inculcado autorice a su defensor para dar notificaciones, citaciones, emplazamientos, o requerimientos, practicados con éste, se entenderán hechos al inculcado, con excepción del auto de formal prisión, citación para la vista y la sentencia definitiva.

Artículo 88.- Cuando haya que notificar a una persona fuera del Distrito Federal, se librará exhorto u oficio de colaboración según el caso, en la forma y términos que dispone esta ley.

Artículo 91.- Todas las notificaciones judiciales hechas contra lo dispuesto en este capítulo serán nulas, excepto en el caso del artículo anterior.

TITULO SEGUNDO

Diligencias de averiguación previa e Instrucción

SECCION PRIMERA

Disposiciones comunes

CAPITULO I

Elementos del tipo, huellas y objetos del delito

Artículo 94.- Cuando el delito deje vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el Ministerio Público o el agente de la Policía Judicial lo hará constar en el acta o parte que levante, según el caso, reconociéndolos si fuere posible.

Artículo 97.- Si para la comprobación de los elementos del tipo penal, o de sus circunstancias, tuviere importancia el reconocimiento de un lugar cualquiera, se hará constar en la descripción del mismo, sin omitir detalle alguno que pueda tener valor.

Artículo 98.- El Ministerio Público o la Policía Judicial, en su caso, procurará recoger en los primeros momentos de su investigación, las armas, instrumentos u objetos de cualquier clase que pudieren tener relación con el delito y se hallaren en el lugar en que éste se cometió, en sus inmediaciones, en poder del inculcado o en otra parte conocida, expresando cuidadosamente el lugar, tiempo y ocasión en que encontraron, y haciendo una descripción minuciosa de las circunstancias y de su hallazgo. De todos estos objetos entregará recibo a la persona en cuyo poder se encuentren, la que asentará su conformidad o no conformidad, el duplicado se agregará al acta que se levante.

Artículo 100.-

Artículo 101.- Cuando la víctima del delito sea o su representante legal lo solicite, la exploración y atención médica, psiquiátrica,

ginecológica o cualquiera que se le practique, estará a cargo de personal facultativo de su mismo sexo.

Artículo 110.- Cuando la víctima lo desee, podrá ser atendida en su domicilio por facultativos particulares, mediante el consentimiento de atenderlo y de rendir los informes a que se refiere el artículo anterior, pero los médicos legistas seguirán con la obligación de visitar periódicamente a la víctima y de rendir también sus informes, cuando así lo determine el juez.

Artículo 115.- Derogado.

Artículo 116.- Derogado.

Artículo 117.- Derogado.

Artículo 119.- Si el delito fuere de falsedad o de falsificación de documentos, se hará una minuciosa descripción del instrumento arguido de falso y se depositará en lugar seguro, haciendo que firmen en él, si fuere posible, las personas que depongan respecto a su falsedad; en caso contrario se harán constar los motivos. Al expediente se agregará una copia certificada del documento arguido de falso y otra fotográfica del mismo, cuando sea posible. La comprobación de los elementos del tipo, en los casos de falsedad, se hará como lo dispone el artículo 122 de este código.

Artículo 120.- Cualquier persona que tenga en su poder un instrumento público o privado que se sospeche sea falso, tiene obligación de presentarlo al Ministerio Público o al juez, tan luego como para ello sea requerido.

Artículo 121.- En todos los delitos en que se requieran conocimientos especiales para su comprobación, se utilizarán, asociadas, las pruebas de inspección ministerial o judicial y de peritos, sin perjuicio de las demás.

Artículo 122.- El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculcado, como base del ejercicio de la acción; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son los siguientes:

I.- La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o, en su caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido;

II.- La forma de intervención de los sujetos activos; y

III.- La realización dolosa o culposa de la acción u omisión.

Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere: a) las calidades del sujeto activo y del pasivo; b) el resultado y su atribución a la acción u omisión; c) el objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; f) los elementos normativos; g) los elementos subjetivos específicos y h) las demás circunstancias que la ley prevea.

Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculcado, la autoridad deberá constatar si no existe acreditada en favor de aquél alguna causa de libertad y que obre datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad.

Los elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilidad se acreditará por cualquier medio probatorio que señale la ley.

Artículo 123.- Derogado.

Artículo 123 Bis.- Derogado.

Artículo 124.- Para la comprobación de los elementos del tipo y la probable o plena responsabilidad del inculcado, en su caso, el

tribunal lo estimen necesario, aun cuando no se hayan practicado en la instrucción.

Artículo 147.- La diligencia de reconstrucción de hechos podrá repetirse cuantas veces lo estime necesario el funcionario que practique las diligencias de averiguación previa o de instrucción.

Artículo 148.-

I.- El juez o el Ministerio Público que ordene la diligencia con su secretario o testigos de asistencia;

II.- El inculcado y su defensor;

III.- El inculcado y su defensor;

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

Artículo 150.- Para practicar ésta, el personal del Ministerio Público o del juez se trasladará al lugar de los hechos juntamente con las personas que deban concurrir, tomará a testigos y peritos la protesta de producirse con verdad, designará a la persona o personas que sustituyan a los agentes del delito que no estén presentes, y dará fe de las circunstancias y pormenores que tengan relación con éste. En seguida leerá la declaración del inculcado y hará que éste expone prácticamente las circunstancias del lugar, tiempo y forma en que se desarrollaron los hechos. Lo mismo se hará con cada uno de los testigos presentes. Entonces los peritos emitirán su opinión en vista de las declaraciones rendidas y de las huellas o indicios existentes, atendiendo a las indicaciones y preguntas que haga el Ministerio Público o el juez, los que procurarán que los dictámenes versen sobre puntos precisos.

Artículo 161.- En la misma forma que determina este capítulo se procederá, cuando mediare exhorto, requisitoria o oficio de colaboración emitido por el Ministerio Público requerente para el cateo o la visita domiciliar.

Artículo 166.- La autopsia de los cadáveres de personas que hayan fallecido en un hospital público la practicarán los médicos de éste, o el personal del Ministerio Público o del juez para encomendarla a otros.

Artículo 167.- Fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, el reconocimiento o la autopsia se practicará por los médicos legistas o por los peritos médicos que designe el Ministerio Público o el juez.

Artículo 174.- El juez y las partes harán a los peritos todas las preguntas que consideren oportunas; les darán por escrito o de palabra pero sin sugerencia alguna los datos que consten en el expediente y se asentarán estos hechos en el acta de la diligencia respectiva.

Artículo 176.- El Ministerio Público o el juez, cuando lo juzgue conveniente, asistirán al reconocimiento que los peritos hagan de las personas o de los objetos.

Artículo 177.- Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo rendirán en diligencia especial, en el caso de que sean objetos de falsedad, o el Ministerio Público o el juez lo estimen necesario.

Artículo 183.- Cuando el inculcado, el ofendido o víctima, el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o entiendan, los testigos o los peritos castellano, el Ministerio Público o el juez nombrarán uno o dos traductores mayores de edad, que prestarán traducción fielmente las preguntas y

respuestas que deben transmitir. Sólo cuando no pueda encontrarse un traductor mayor de edad, podrá nombrarse uno de quince años cumplidos, cuando menos.

CAPITULO IX

Testigos

Artículo 189.- Si por las revelaciones hechas en las primeras diligencias, en la querrela o en cualquier otro modo, apareciere necesario el examen de algunas personas para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, de sus circunstancias o del inculcado, el Ministerio Público o el juez deberán examinarlas.

Artículo 191.- Toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser examinada como testigo, siempre que pueda aportar algún dato para la averiguación del delito y el Ministerio Público o el juez estimen necesario su examen. En estos casos, el funcionario ante quien se realice la diligencia podrá desear las preguntas que a su juicio o por objeción fundada de parte sean inconducentes, y demás podrá interrogar al testigo sobre los puntos que estime convenientes.

Artículo 193.- En materia penal no puede oponerse tacha a los testigos; pero de oficio o a petición de parte, el Ministerio Público o el juez, harán constar en el expediente todas las circunstancias que influyan en el valor probatorio de los testimonios.

Artículo 197.- La citación puede hacerse en persona al testigo en dondequiera que se encuentre, o en su habitación, aun cuando no estuviere en ella; pero en este caso se hará constar el nombre de la persona a quien se entregue la cédula, en la cual aquélla manifieste que el citado está ausente, dirá dónde se encuentra, desde qué tiempo y cuándo se espera su regreso. Todo esto se hará constar para que el Ministerio Público o el juez dicten las providencias procedentes. También podrá enviarse la cédula por correo.

Artículo 200.- Si el testigo se hallare fuera del ámbito territorial se le examinará, por exhorto dirigido al juez de su residencia, o con base en los oficios de colaboración a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal. Si aquélla se ignorare, se encargará a la Policía Judicial que averigüe el paradero del testigo y lo cite. Si esta investigación no tuviere éxito, el Ministerio Público o el juez podrán hacer la citación por medio de edicto en el periódico oficial.

Artículo 201.- Si el testigo se hallare en la misma población, pero tuviere imposibilidad física para presentarse ante el Ministerio Público o al juzgado, éstos según el caso, asistirán al examen, o se trasladarán a la casa del testigo a recibir su declaración.

Artículo 203.- Los testigos deben ser examinados separadamente, por el Ministerio Público o por el juez, en presencia del secretario. Sólo las partes podrán asistir a la diligencia, salvo en los casos siguientes:

I a III.-

Artículo 204.- En el caso de la fracción I del artículo anterior, el Ministerio Público o el juez, designarán para que acompañe al testigo, a otra persona que firmará la declaración, después de que aquél la ratifique. En el caso de las fracciones II y III, se procederá conforme a los artículos 183, 187 y 188 de este código.

Artículo 205.- Antes de que los testigos comiencen a declarar, el Ministerio Público o el juez instruirá de las sanciones que impone el Código Penal a los que se producen con falsedad o se niegan a declarar o a otorgar la protesta de ley. Esto podrá hacerse hallándose reunidos todos los testigos.

Artículo 206.- Después de tomada la protesta, se preguntará a cada testigo su nombre, apellido, edad, nacionalidad, vecindad, habitación, estado, profesión o ejercicio, si se halla ligado al inculcado, o a la víctima, al ofendido o al querrelante, por vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, y si tiene motivo de odio o de rencor contra alguno de ellos.

Artículo 207.- Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer las respuestas que lleven escritas. Sin embargo, podrán ver algunas notas o documentos que lleven, según la naturaleza de la causa, a juicio del Ministerio Público o del juez.

El Ministerio Público o el defensor pueden examinar a los testigos, haciéndoles las preguntas que estén convenientes.

Artículo 212.- Siempre que se tome declaración a un menor de edad, a un pariente del inculcado, o a cualquier otra persona que por circunstancias especiales sea sospechosa de la veracidad o de exactitud en su dicho, se hará constar esto en el acta.

Artículo 213.- A los menores de dieciocho años, en vez de exigirles protesta de veracidad, se les exhortará para que digan.

Artículo 214.- Si de las actuaciones aparecieren indicios bastantes para sospechar que algún testigo se ha producido con falsedad, o se ha contradicho manifiestamente en sus declaraciones, quedará inmediatamente a disposición del Ministerio Público, se mandarán compulsar las piezas conducentes para la averiguación del delito y se formará por separado el expediente correspondiente, sin que por esto se suspenda la causa que se esté siguiendo.

Artículo 216.- El Ministerio Público o el juez, podrán dictar las providencias necesarias para que los testigos no se comuniquen entre sí, ni por medio de otra persona, antes de rendir su declaración.

Artículo 217.- Toda persona que tuviere que referirse a otra en su declaración o en cualquier otro acto procesal, lo hará de un modo claro y preciso que no deje lugar a duda respecto a la persona que señale, mencionando su nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias que puedan darla a conocer.

Artículo 220.- Si alguna de las partes pidiere que se tomen mayores precauciones que las prevenidas en el artículo anterior, podrá acordarlas el Ministerio Público o el juez, siempre que no perjudiquen la verdad ni aparezcan intenciones maliciosas.

Artículo 221.- El que deba ser confrontado podrá elegir el sitio en que quiera ser colocado entre sus acompañantes a esta diligencia, y pedir se excluya de la reunión a la persona que le parezca sospechosa. Queda al arbitrio del Ministerio Público o del juez acceder o negar la petición.

Artículo 225.- Siempre que el procesado lo solicite, será llamado en presencia del juez con los testigos que depongan en su contra.

Artículo 228.- Los careos se practicarán dando lectura a las declaraciones de los careados, a fin de que entre sí reconvengan, el resultado del careo se asentará en el expediente.

Artículo 229.- Deregado.

Artículo 231.- Siempre que alguno de los interesados pidiere copia o testimonio de parte de documentos que obren en los archivos públicos, los otros interesados tendrán derecho a que se adicione con lo que crean conducente de los mismos documentos. El Ministerio Público o el juez, de plano, resolverán si se procede a la adición o parte de ella.

Artículo 232.- Los documentos que durante la tramitación del expediente presentaren las partes, o que deban obrar en el mismo, se agregarán a éste y de ello se asentará razón.

Artículo 233.- La compulsión de los documentos existentes fuera del ámbito territorial del Ministerio Público o del juez que conozca del asunto, se hará a virtud de oficio de colaboración o exhorto según corresponda.

Artículo 237.- El juez leerá para sí la correspondencia. Si no tuviere relación con el hecho que se averigua, la devolverá al procesado o a alguna persona de su familia, si estuviere ausente. Si la correspondencia tuviere alguna relación con el hecho materia del juicio, el juez comunicará su contenido al procesado y mandará agregar el documento al expediente. En todo caso, levantará acta de la diligencia.

Artículo 241.- Cuando a solicitud de parte interesada, el Ministerio Público o el juez, mande sacar testimonio de documentos privados existentes en poder de las partes, se exhibirán para compulsar lo que señalen las partes. Si el tenedor del documento se resistiere a exhibirlo, el Ministerio Público o el juez, en audiencia verbal y en vista de lo que aleguen el tenedor y las partes, resolverán si debe hacerse la exhibición.

Artículo 244.-

I.- El Ministerio Público o el juez, podrán ordenar que se repita el cotejo por los peritos.

Artículo 246.- El Ministerio Público y la autoridad judicial apreciarán las pruebas, con sujeción a las reglas de este capítulo.

Artículo 248.- La confesión ante el Ministerio Público y ante el juez deberá reunir los siguientes requisitos:

I.- Se deroga.

II.- Se deroga.

III.-

IV.- Que sea hecha ante el Ministerio Público, juez o tribunal de la causa, asistido por su defensor o persona de su confianza, y que esté el inculcado debidamente enterado del procedimiento; y

V.- Que no vaya acompañada de otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil, a juicio del Ministerio Público o del juez.

Artículo 253.- La inspección, así como el resultado de las visitas domiciliarias que se hagan, serán plenas, siempre que se practiquen con los requisitos de este ley.

Artículo 254.- La fuerza probatoria de todo dictamen pericial, incluso el cotejo de letados y los dictámenes de peritos científicos, será calificada por el Ministerio Público, por el juez o por el tribunal, según las circunstancias.

Artículo 255.- Para apreciar la declaración de un testigo, el Ministerio Público o el tribunal o el juez tendrán en consideración:

I.- La V.-

VI.- Que el testigo no haya sido presionado por fuerza o miedo, ni inducido por engaño, error o soborno. El premio no se reputará fuerza.

Artículo 258.- Deregado.

Artículo 259.- Deregado.

Artículo 260.- Deregado.

Artículo 261.- El Ministerio Público, los jueces y tribunales según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena.

SECCIÓN SEGUNDA Diligencias de averiguación previa

CAPÍTULO I Iniciación del procedimiento

Artículo 262.- Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo a las ordenes que reciben de quienes están obligados a obedecer de oficio a la averiguación de los delitos del orden común de que tengan noticia. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes:

I.-

Artículo 264.- Cuando para la persecución de los delitos sea necesaria la querrela de parte ofendida, bastará que ésta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su queja, para que se proceda en los términos de los artículos 275 y 276 de este código. Si en caso urgente, para tener por satisfecho el requisito de la querrela necesaria, a la víctima o titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la conducta imputada al inculcado, y tratándose de delitos de los ascendientes y a falta de éstos, a los hermanos o a los que representen a aquéllos legalmente, cuando la víctima por cualquier motivo no se pueda expresar, el legítimo representante legal de ella será la persona prevista por el artículo 30 bis del Código Penal.

Artículo 266.- El Ministerio Público y la Policía Judicial a su mando están obligados a detener al responsable, sin esperar a tener orden judicial, en delito flagrante o en caso urgente.

Artículo 267.- Se entiende que existe delito flagrante, no sólo cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo, sino cuando, después de ejecutado el hecho delictuoso, el inculcado es perseguido materialmente o cuando en el momento de haberlo cometido, alguien lo señala como responsable del mismo delito, o cuando se encuentra en su poder el objeto del mismo, el instrumento con que aparece cometido o huellas o indicios que hagan presumir fuertemente su culpabilidad.

En esos casos, el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa y bajo su responsabilidad, según proceda, decretará la retención del inculcado si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y el caso merece pena privativa de libertad, o bien, ordenará la libertad del

detenido, cuando la sanción sea no privativa de libertad, o bien, alternativa.

La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Ministerio Público que decretare la indebida retención, y el inculcado deberá ser puesto en inmediata libertad.

Artículo 268.- Habrá caso urgente cuando:

a) Se trate de delito grave, así calificado por la ley.

b) Que exista riesgo fundado de que el inculcado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y

c) Que el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar, u otras circunstancias.

El Ministerio Público al emitir la orden de detención en caso urgente deberá hacerlo por escrito, fundando y expresando los indicios que acrediten los requisitos mencionados en los incisos anteriores.

La orden mencionada será ejecutada por la Policía Judicial, quien deberá sin dilación alguna poner al detenido a disposición del Ministerio Público que la haya librado.

Para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, se califican como delitos graves, los siguientes: Homicidio por culpa grave previsto en el artículo 60 párrafo tercero; terrorismo previsto en el artículo 139 párrafo primero; sabotaje previsto en el artículo 140 párrafo primero; evasión de presos previsto en los artículos 150 con excepción de la parte primera del párrafo primero y 152, ataques a las vías de comunicación previstos en los artículos 168 y 170; corrupción de menores previsto en el artículo 201; violación previsto en los artículos 265, 266 y 268 bis, asalto previsto en los artículos 266 párrafo segundo y 267; homicidio previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315 bis, 320 y 323; secuestro previsto en el artículo 366 exceptuando los párrafos antepenúltimo y penúltimo; robo calificado previsto en los artículos 367, en relación con el 370 párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372, 381 párrafos VII, IX y X, y 381 bis y exteriorizado previsto en el artículo 390 todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Artículo 268 bis.- En los casos de delito flagrante y en los urgentes, ningún inculcado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en el que deberá ordenar su libertad, o ponerlo a disposición de autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en los casos de delincuencia organizada, que serán aquellos en los que tres o más personas se organicen bajo reglas de disciplina y jerarquía para cometer de modo violento o relacionado con fines predominantemente lucrativos alguno de los delitos previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Federal: terrorismo previsto en el artículo 139 párrafo primero; sabotaje previsto en el artículo 140 párrafo primero; evasión de presos prevista en el artículo 150 con excepción de la parte primera del párrafo primero y 152, ataques a las vías de comunicación previstos en los artículos 168 y 170, violación previsto en el artículo 201, 265, 266 bis, 302 con relación al 307, 315 y 320, secuestro previsto en el

artículo 366 fracciones I a VI, exceptuando los párrafos antepenúltimo y penúltimo, robo calificado previsto en el artículo 370 párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372, 381 párrafos IX y X, 381 bis, y el de extorsión previsto en el artículo 390.

Si para integrar la averiguación previa fuese necesario mayor tiempo del señalado en el párrafo anterior, el detenido será puesto en libertad, sin perjuicio de que la indagación continúe sin detenido.

El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la detención fue apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificará la detención y en el segundo decretará la libertad con las reservas de ley.

Artículo 269.- Cuando el inculcado fuere detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I.- Se hará constar la hora, fecha y lugar de la detención, así como, en su caso el nombre y cargo de quien la haya ordenado y ejecutado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad ajena al Ministerio Público, se asentará o se agregará, en su caso, información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o recibido al detenido.

II.- Se le hará saber de la imputación que exista en su contra y el nombre del denunciante, acusador o querrelante.

III.- Será informado de los derechos que en averiguación previa consigna en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichos derechos, son:

a) No declarar si así lo desea;

b) Que debe tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiera o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor; y

c) Que si asistido por su defensor cuando declare: d) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación previa; e) Que se le permitirá a él y su defensor hacerlo cuantas veces se le requiera;

f) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación previa, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el acta de averiguación previa;

g) Que se le reciban los testigos y las demás pruebas que ofrezca, las cuales se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediendo el tiempo necesario para su desahogo, siempre que no se traduzca en dilación de la averiguación previa; y las personas cuyos testimonios ofrezcan se encuentren presentes en la oficina del Ministerio Público.

Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculcado y su defensor, el juzgador resolverá en su oportunidad sobre la admisión y práctica de las mismas; y

h) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal, y en los términos del artículo 556 de este Código.

elementos de prueba de que disponga, determinará dicho monto.

IV.- Que tratándose de delitos por imprudencia ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, el presunto responsable no hubiese abandonado al lesionado, ni participado en los hechos en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

V.- Que alguna persona, a criterio del agente investigador del Ministerio Público, fundado en los datos que recabe al respecto, se comprometa, bajo protesta, a presentarse al probable responsable cuando así se le requiera.

VI.- En caso de que el inculcado o la persona a quien se refiere la fracción anterior, desobedecieren la orden de comparecencia, el agente investigador del Ministerio Público, se revocará el arraigo y la averiguación previa será consignada en su caso, solicitando al juez competente la orden de aprehensión o de comparecencia en su caso, según corresponda; y

VII.- El arraigo no podrá prolongarse por más de tres días; transcurridos éstos el arraigado podrá desplazarse libremente, sin perjuicio de que el Ministerio Público, en caso de que continúe la averiguación y solicite la orden mencionada.

Artículo 272.- La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculcado a disposición del juez que la libró, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior, será sancionada por la ley penal.

Tratándose de delitos culposos, cuya pena de prisión no exceda de cinco años, el acusado será puesto a disposición del juez directamente, sin quedar interrumpido en los lugares de prisión preventiva para que pueda solicitar su libertad provisional.

Artículo 274.-

I.- Las pruebas que suministren las personas que rindan el parte o hagan la denuncia, así como las que se recojan en el lugar de los hechos, ya sea que se refieran a la existencia de los elementos del tipo o a la probable responsabilidad de sus autores, cómplices o encubridores; y

II.-

Artículo 279.- Cuando se reciban armas u otros objetos que se relacionen con el delito, se hará la descripción de ellos en las actas, expresándose las marcas, calidades, materia y demás circunstancias características que faciliten su identificación; si se recibiere dinero o billetes, se anotará el primer número, expresándose la clase de monedas y su número, y se especificarán debidamente las segundas, entregándose el recibo que menciona el artículo 98 de este código.

Artículo 283.- En el caso de calumnia y, en general, en todos los delitos en los que la ley exija una declaración judicial previa, deberá presentarse, con la denuncia o querrela, copia de la sentencia irrevocable en que se haga dicha declaración.

Artículo 284.- El Ministerio Público o sus auxiliares asentarán, en el acta que levanten, todas las observaciones que puedan recoger acerca de las modalidades en que se cometió el delito.

Artículo 285.- Los mismos servidores

Para los efectos de los incisos b), c) y d) se le permitirá al inculcado comunicarse con las personas que solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que se disponga, o personalmente si se hallaren presentes; y

IV.- Cuando el inculcado fuere un indigena o extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere este artículo. Si se tratara de un extranjero la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda.

De la información al inculcado, sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en el acta de averiguación previa.

En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención.

Artículo 270.- Antes de trasladar al probable responsable al reclusorio preventivo, se le identificará debidamente.

Artículo 271.- El Ministerio Público que conozca de un hecho delictuoso, hará que tanto el ofendido como el probable responsable sean examinados inmediatamente por los médicos legistas, para que éstos dictaminen, con carácter de provisorio, acerca de su estado psicofisiológico.

El Procurador determinará mediante disposiciones de carácter general el monto de la caución aplicable para gozar de la libertad provisional en la averiguación previa.

Cuando el Ministerio Público decreta esa libertad al probable responsable lo prevendrá para que comparezca ante el mismo para la práctica de diligencias de averiguación, en su caso y concluida ésta ante el juez a quien se consignó la averiguación, quien ordenará su presentación y si no comparece ordenará su aprehensión previa solicitud del Ministerio Público mandando hacer efectiva la garantía otorgada.

El Ministerio Público podrá hacer efectiva la garantía si el probable responsable desobedeciere, sin causa justificada, las órdenes que dicte.

La garantía se cancelará y en su caso se devolverá cuando se resuelva el no ejercicio de la acción penal o una vez que se haya prescrito el probable responsable ante el juez de la causa y éste acuerde la devolución.

En las averiguaciones previas por delitos que sean de la competencia de los juzgados de paz en materia penal o siendo de los juzgados penales, cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión, el probable responsable no será privado de su libertad en los lugares ordinarios de detención y podrá quedar arraigado en su domicilio, con la facultad de trasladarse al lugar de su trabajo, si concurrieren las circunstancias siguientes:

I.- Protesta presentarse ante el Ministerio Público que tramite la averiguación, cuando éste lo disponga;

II.- No existan datos de que pretenda sustraerse a la acción de la justicia;

III.- Realice convenio con el ofendido o sus coahabientes, ante el Ministerio Público de la forma en que reparará el daño causado, en su caso, cuando no se convenga sobre el monto del Ministerio Público con base en una estimación de los daños causados, en la inspección ministerial que practique, en las versiones de los supuestos relacionados con los hechos y en los demás

diligencias en que hubieren intervenido, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenecen, en su caso.

Artículo 285 bis.- En la averiguación previa en contra de alguna persona que no hable o no entienda suficientemente el idioma castellano, se le nombrará un traductor desde el primer día de su detención, o presentación, quien deberá asistir en todos los actos procesales sucesivos en los que debe intervenir el inculcado y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor.

El juez, en su caso, de oficio o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar al traductor que mejor dicha comunicación.

Artículo 286 bis.- Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querrela, que se han reunido los requisitos previstos que en su caso exijan la ley y que se han acreditado los elementos del tipo y la probable responsabilidad del inculcado, el Ministerio Público ejercerá la acción penal ante el órgano jurisdiccional que corresponda.

El juzgado ante el que se ejerce la acción penal, radicará de inmediato el asunto. Sin más trámite le abrirá expediente en el que se resolverá lo que legalmente corresponda y practicar, sin demora alguna, todas las diligencias que resulten procedentes.

Si la consignación es con detenido deberá inmediatamente ratificar la detención, si ésta fuere constitucional; en caso contrario decretará la libertad con las reservas de ley.

Si durante el plazo de tres días, contados a partir del que se haya hecho la consignación sin detenido, el juez no dicta auto de radicación en el asunto, el Ministerio Público podrá recurrir en queja ante la Sala Penal del Tribunal Superior que corresponda.

El juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión o comparecencia solicitada por el Ministerio Público dentro de los cinco días contados a partir de la fecha en que se haya acordado la radicación.

Tratándose de consignación sin detenido por delito grave o delincuencia organizada, inmediatamente debe radicarse el asunto, y dentro de las veinticuatro horas siguientes la autoridad resolverá sobre el pedimento de la orden de aprehensión. Si el juez no resuelve oportunamente sobre estos puntos, el Ministerio Público procederá en los términos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 287.- Dentro de las cuarenta y ocho horas contadas desde que el inculcado ha quedado a la disposición de la autoridad judicial encargada de practicar la instrucción, se procederá a formular su declaración preparatoria; la misma se rendirá en forma oral o escrita, por el inculcado en presencia de su defensor para la asistencia jurídica que requiera. El inculcado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciera, el juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los inculcados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia. Cuando haya diversos inculcados que deban rendir declaración, el juez adoptará las medidas legales.

Artículo 288.- Esta diligencia se practicará en un local en que el público pueda tener libre acceso, quedando éste sujeto a las disposiciones de

Capítulo VII, Título Preliminar de este Código.

debiéndose impedir que permanezcan en dicho lugar los que tengan que ser examinados como testigos en la misma causa.

Artículo 289.- En ningún caso, y por ningún motivo, podrá la autoridad emplear la incomunicación, intimidación o tortura para lograr la declaración del inculcado, o para otra finalidad.

Artículo 290.- La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculcado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho a una defensa adecuada por sí o por abogado o por personas de su confianza, advirtiéndole que si no lo quiere, el juez le nombrará un defensor de oficio.

Si el inculcado no hubiere solicitado su libertad bajo caución en averiguación previa, se le hará saber nuevamente de ese derecho en los términos del artículo 20 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 566 de este código.

A continuación se le hará saber en qué consiste la denuncia, acusación o querrela, así como los nombres de sus acusadores, querrelantes o querrelados y de los testigos que se declaran en su contra, se le preguntará si es su voluntad declarar y en caso de que así lo desee se le examinará sobre los hechos consignados. Si el inculcado no quiere declarar, el juez respetará su voluntad dejando constancia de ello en el expediente.

Igualmente se le harán saber todas las siguientes garantías que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: que se le recibirán todos los testigos y las pruebas que ofrezca, en términos legales, ayudándole para obtener la comparecencia de las personas que comparezcan, siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar del juicio, y que le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y consten en el proceso.

Artículo 292.- El agente del Ministerio Público y la defensa tendrán el derecho de interrogar al procesado; pero el juez tendrá en todo tiempo la facultad de desechar las preguntas si fueren objetadas fundadamente o a su juicio resultaren inconducentes.

Artículo 293.- El inculcado podrá redactar sus contestaciones, si no lo quiere, las redactará el Ministerio Público o el juez. En el caso de que, procurando interpretárlas con la mayor exactitud posible, sin omitir detalle alguno que pueda servir de cargo o de descargo.

Artículo 294.- La declaración o declaración o obtenida la manifestación del inculcado de que no desea declarar, el juez nombrará al procesado un defensor de oficio, cuando proceda, de acuerdo con la fracción III del artículo 20 de este código.

Artículo 295.- El juez interrogará al inculcado sobre su participación en los hechos imputados, y practicará comparecencia entre el inculcado y los testigos que hayan declarado en su contra y estuvieren en el lugar del juicio, para que aquel y su defensor puedan hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa, mismo derecho que también corresponde al Ministerio Público. Este derecho se practicará siempre que lo solicite el inculcado.

Artículo 296.- Si el inculcado tuviera varios defensores, estará obligado a nombrar un

representante común o, en su defecto, lo hará el juez.

Artículo 296 bis.- Durante la instrucción, el juez que conozca del proceso deberá observar las circunstancias peculiares del inculcado, allegándose datos para conocer su edad, educación e instrucción, sus costumbres y conducta anteriores, los motivos que lo impulsaron a delinquir, sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito, la pertenencia al grupo étnico indígena, en su caso, a un grupo étnico indígena, y las prácticas y características como miembro de dicho grupo pueda tener, los demás antecedentes personales que puedan comprobarse, así como vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las víctimas u ofendidos por el delito, y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad.

CAPÍTULO II

Auto de formal prisión o de sujeción a proceso y libertad por falta de elementos para procesar

Artículo 297.- Todo auto de formal prisión deberá reunir los siguientes requisitos:

I.- Se dictará dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el inculcado sea puesto a disposición de la autoridad judicial;

II.- Que se le haya tomado la declaración preparatoria al inculcado en los términos de ley, o bien, conste en el expediente que se negó a emitirla;

III.- Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito por el cual debe seguirse el proceso;

IV.- Que el delito sea sancionado con pena privativa de libertad;

V.- Que no esté acreditada alguna causa de liti-

VI.- Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que hagan probable la responsabilidad del inculcado; y

VII.- Los nombres y firmas del juez que dicte la resolución y del secretario que la autorice.

El plazo a que se refiere la fracción I de este artículo, se duplicará cuando lo solicite el inculcado por sí, o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria, siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación jurídica.

El Ministerio Público no podrá solicitar dicha ampliación de plazo, sino que si lo desea, el Ministerio Público en ese plazo puede sólo en relación con las pruebas o alegatos que propusiere el inculcado o su defensor, hacer las promociones correspondientes al interés social que representa.

La ampliación del plazo se deberá notificar al Director del reclusorio preventivo, en donde en su caso, se encuentre internado el inculcado, para los efectos a que se refiere la última parte del primer párrafo del artículo 19 constitucional.

Artículo 298.- Dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez ordenará que se identifique al procesado por el sistema administrativo adoptado para el caso.

Artículo 299.- El auto de formal prisión se notificará inmediatamente que se dicte, al inculcado, al defensor, al Ministerio Público, y al establecimiento de detención, al que se dará copia autorizada de la resolución, lo mismo que al detenido, si lo solicitare.

El inculcado o su defensor podrán renunciar a los plazos señalados anteriormente, cuando así lo consideren necesario para ejercer el derecho de defensa.

Artículo 311.- En las conclusiones, que deberán presentarse por escrito, se fijarán en proposiciones concretas los hechos punibles que se atribuyan al acusado, solicitando la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño y perjuicio, con cita de las leyes y de la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deberán contener los elementos de prueba relativos a la comprobación del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad penal.

Artículo 318.- La exposición de las conclusiones de la defensa no se sujeta a regla alguna. Si aquélla no formula conclusiones en el plazo que establece el artículo 315 de este código, se tendrán por formuladas las de inculcabilidad y se impondrá al o a los defensores una multa hasta de cien veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal o un arresto hasta de tres días.

Artículo 319.- Las conclusiones definitivas del Ministerio Público sólo pueden modificarse por causas supervenientes y en beneficio del acusado. La defensa puede libremente retirar y modificar sus conclusiones en cualquier tiempo, hasta antes de que se declare visto el proceso.

Artículo 320.- Si las conclusiones fueren de no acusación, el juez o tribunal las enviará con el proceso al Procurador para los efectos a que se refiere el artículo 321.

Se tendrán por conclusiones no acusatorias aquellas en las que no se concrete la pretensión punitiva, o bien, ejercitándose ésta, se omita acusar.

a) Por algún delito expresado en el auto de formal prisión; o

b) A persona respecto de quien se abrió el proceso.

Artículo 326.- Las partes deberán estar presentes en la audiencia. En caso de que el Ministerio Público o el defensor no concurren, se citará para nueva audiencia dentro de tres días. Si la ausencia fuere injustificada, se aplicará una corrección disciplinaria al defensor particular y se informará al Procurador y al Jefe de la Defensoría de Oficio, en su caso, para que impongan la sanción que proceda a sus respectivos subalternos y puedan nombrar sustituto que asista a la nuevamente citada.

Artículo 413.- Interpuesto en el auto de la notificación o al día siguiente a ésta, el tribunal o juez ante quien se interponga, lo admitirá o desestimaré de plano, si creyere que no es necesario oír a las partes. En caso contrario, las citará a audiencia verbal, que se verificará dentro de los dos siguientes días hábiles y dictará en ellas su resolución, contra la que no se da recurso alguno.

Artículo 414.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada.

Artículo 418.- Son apelables:

I.- Las sentencias definitivas, hechas excepto las que se pronuncian en los procesos sumarios;

II.- Los autos que se pronuncian sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención; el de formal prisión o de sujeción a proceso; o el que los niegue, el que conceda o niegue la libertad;

decretarse la libertad del procesado, por el juez, a petición de parte y en audiencia, cuando el Ministerio Público o la que éste no podrá dejar de asistir.

Artículo 547.-

I.- Cuando en el curso del proceso se hayan desahogado las pruebas, el juez podrá resolver sobre la admisión de pruebas, en el que se hará, además, fijación de fecha para aquélla.

Una vez terminada la recepción de pruebas, las partes deberán formular sus conclusiones y sus conclusiones, cuyos puntos esenciales se harán constar en el acta relativa.

Artículo 509.- El juez podrá dictar sentencia en la misma audiencia o disponer de un término de tres días.

Se deroga.

Artículo 310.- En lo relativo a la asistencia de las partes a la audiencia, la celebración de ésta y la formulación de conclusiones, se estará a lo prevenido, en su caso, por los artículos 320, 323 y 326 de este código.

Artículo 311.- La audiencia se desarrollará en un solo día ininterrumpidamente, salvo que sea necesario suspenderla para permitir el desahogo de pruebas o por otras causas que lo ameriten, a criterio del juez, en cuyo caso se citará para continuar al día siguiente o dentro de tres días; a más tardar, si no bastare aquel plazo para la desaparición de la causa que hubiere motivado la suspensión.

Artículo 314.- En el auto de formal prisión se ordenará poner el proceso a la vista de las partes para que propongan, dentro de siete días hábiles desde el siguiente a la notificación de dicho auto, las pruebas que estimen pertinentes, las que se desahogarán en los quince días posteriores, plazo dentro del cual se practicarán, igualmente, todas aquellas que el juez estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad y en su caso, para la imposición de la pena.

Si al desahogar las pruebas aparecen de las mismas causas, se trate de delitos contra la vida, podrá señalar otro plazo de tres días para aportar pruebas que se desahogarán dentro de los cinco días siguientes para el esclarecimiento de la suspensión.

Para asegurar el desahogo de las pruebas propuestas, los jueces harán uso de los medios de apremio y de las medidas que consideren oportunas para asegurar la comparecencia de las personas por medio de la fuerza pública en los términos del artículo 33.

Cuando el juez o tribunal considere agotada la instrucción, podrá emitir la siguiente resolución que notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de éstas por siete días comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes, y que puedan practicarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el juez, en instancia, podrá, de oficio, ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer o bien ampliar el plazo de su desahogo hasta por cinco días más. Al día siguiente de haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el tribunal, de oficio, y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en que se determinen los cómputos de dichos plazos.

Artículo 551.- En el caso de la fracción II del artículo 547 de este código la resolución que conceda la libertad tendrá los mismos efectos del auto de libertad por falta de elementos, quedando expedida la acción del Ministerio Público para pedir de nuevo la aprehensión o comparecencia del inculcado, si aparecieren nuevos datos que lo ameriten, así como nueva formal prisión o sujeción a proceso.

En el caso de la fracción I del artículo 547 de este código, la resolución que concede la libertad, tendrá efectos definitivos y se sobreseerá el proceso.

Artículo 552.-

I.- Cuando el juez no hubiere temer de que se aguste la acción de la justicia,

II.- Cuando el juez no hubiere temer de que se aguste la acción de la justicia,

III.- Cuando el juez no hubiere temer de que se aguste la acción de la justicia,

III.-

IV.-

Artículo 420.- Al notificarse la sentencia definitiva se hará saber al procesado el plazo que la ley concede para interponer el recurso de apelación, quedando constancia en el proceso de haberse cumplido con esta prevención. La omisión de este requisito surtirá el efecto de duplicar el plazo legal para interponer el recurso, y el secretario será castigado disciplinariamente por el tribunal de alzada con multa que no exceda de cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 421.- Interpuesto el recurso dentro del plazo legal y por quien tuviere personalidad para hacerlo, el juez, de plano, sin subestanciación alguna lo admitirá si procediere. Contra este auto no se da recurso alguno.

Si no admitiere la apelación, procederá el recurso de denegada apelación.

Si el apelante fuere el procesado, al admitirse el recurso, se le prevendrá para que nombre defensor que lo patrociné en la segunda instancia.

Artículo 431.-

I a VI.

VI bis.- Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado, se reputan como omisiones graves de la defensa:

a) No haber asesorado al inculcado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso;

b) No haber asistido a las diligencias que se practican con intervención del inculcado durante la averiguación previa y durante el proceso;

c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculcado;

d) No haber hecho valer las circunstancias probadas que el proceso favorecieron la defensa del inculcado;

e) No haber interpuesto los medios de impugnación necesarios para la defensa del inculcado; y

f) No haber promovido todos aquellos actos procesales que fuesen necesarios para el desarrollo normal del proceso y el pronunciamiento de la sentencia.

Artículo 445.- Los tribunales ordinarios serán competentes para conocer de los delitos comunes cometidos por servidores públicos, con las excepciones y limitaciones que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de los Tribunales.

Artículo 446.- Es juez competente para juzgar de los hechos delictivos y para aplicar la sanción procedente al del lugar donde se hubiere cometido el delito.

Artículo 487.- Podrán promover la acumulación al Ministerio Público, el ofendido o sus representantes y el procesado o sus defensores.

Artículo 532.- La reparación del daño que se exija a terceros, de acuerdo con el artículo 32 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal deberá promoverse ante el juez o tribunal que conoce la acción penal, en cualquier estado del proceso, y se tramitará y resolverá conforme a los artículos siguientes.

Artículo 546.- En cualquier estado del proceso en que aparezca que se han desvanecido los fundamentos que hayan servido para decretar la formal prisión o sujeción a proceso, podrá solicitarse la libertad del procesado, por el juez, a petición de parte y en audiencia, cuando el Ministerio Público o la que éste no podrá dejar de asistir.

Artículo 547.-

I.- Cuando en el curso del proceso se hayan desahogado las pruebas, el juez podrá resolver sobre la admisión de pruebas, en el que se hará, además, fijación de fecha para aquélla.

Una vez terminada la recepción de pruebas, las partes deberán formular sus conclusiones y sus conclusiones, cuyos puntos esenciales se harán constar en el acta relativa.

Artículo 509.- El juez podrá dictar sentencia en la misma audiencia o disponer de un término de tres días.

Se deroga.

Artículo 310.- En lo relativo a la asistencia de las partes a la audiencia, la celebración de ésta y la formulación de conclusiones, se estará a lo prevenido, en su caso, por los artículos 320, 323 y 326 de este código.

Artículo 311.- La audiencia se desarrollará en un solo día ininterrumpidamente, salvo que sea necesario suspenderla para permitir el desahogo de pruebas o por otras causas que lo ameriten, a criterio del juez, en cuyo caso se citará para continuar al día siguiente o dentro de tres días; a más tardar, si no bastare aquel plazo para la desaparición de la causa que hubiere motivado la suspensión.

Artículo 314.- En el auto de formal prisión se ordenará poner el proceso a la vista de las partes para que propongan, dentro de siete días hábiles desde el siguiente a la notificación de dicho auto, las pruebas que estimen pertinentes, las que se desahogarán en los quince días posteriores, plazo dentro del cual se practicarán, igualmente, todas aquellas que el juez estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad y en su caso, para la imposición de la pena.

Si al desahogar las pruebas aparecen de las mismas causas, se trate de delitos contra la vida, podrá señalar otro plazo de tres días para aportar pruebas que se desahogarán dentro de los cinco días siguientes para el esclarecimiento de la suspensión.

Para asegurar el desahogo de las pruebas propuestas, los jueces harán uso de los medios de apremio y de las medidas que consideren oportunas para asegurar la comparecencia de las personas por medio de la fuerza pública en los términos del artículo 33.

Cuando el juez o tribunal considere agotada la instrucción, podrá emitir la siguiente resolución que notificará personalmente a las partes, y mandará poner el proceso a la vista de éstas por siete días comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes, y que puedan practicarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el juez, en instancia, podrá, de oficio, ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer o bien ampliar el plazo de su desahogo hasta por cinco días más. Al día siguiente de haber transcurrido los plazos establecidos en este artículo, el tribunal, de oficio, y previa la certificación que haga el secretario, dictará auto en que se determinen los cómputos de dichos plazos.

Artículo 551.- En el caso de la fracción II del artículo 547 de este código la resolución que conceda la libertad tendrá los mismos efectos del auto de libertad por falta de elementos, quedando expedida la acción del Ministerio Público para pedir de nuevo la aprehensión o comparecencia del inculcado, si aparecieren nuevos datos que lo ameriten, así como nueva formal prisión o sujeción a proceso.

En el caso de la fracción I del artículo 547 de este código, la resolución que concede la libertad, tendrá efectos definitivos y se sobreseerá el proceso.

Artículo 552.-

I.- Cuando el juez no hubiere temer de que se aguste la acción de la justicia,

II.- Cuando el juez no hubiere temer de que se aguste la acción de la justicia,

III.- Cuando el juez no hubiere temer de que se aguste la acción de la justicia,

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-

XV.-

XVI.-

XVII.-

XVIII.-

XIX.-

XX.-

XXI.-

XXII.-

XXIII.-

XXIV.-

XXV.-

Artículo 567.- Al notificarse al inculcado el auto que le concede la libertad caucional, se le hará saber que contrae las siguientes obligaciones: presentarse ante el Ministerio Público o el juez cuantas veces sea citado o requerido para ello; comunicar a los mismos los cambios de domicilio que tuviere, y presentarse ante el Ministerio Público, juzgado o tribunal que conozca de su causa el día que se le señale de cada semana. En la notificación se hará constar que se hicieron saber al inculcado las anteriores obligaciones, pero la omisión de este requisito no libera al inculcado de ellas ni de sus consecuencias.

En los casos a que se refiere el artículo 133 bis, el juez, al notificar el auto de sujeción a proceso le hará saber que ha contraído las dos primeras obligaciones señaladas en el primer párrafo de este mismo artículo.

Artículo 568.- El juez podrá revocar la libertad caucional cuando a su criterio el procesado incumpla en forma grave con cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo anterior. Asimismo, se revocará la libertad caucional en los siguientes casos:

I.- Si durante la instrucción apareciere que el delito o los delitos materia del auto de formal prisión son de los considerados como graves; y

II.- Si se deroga.

Artículo 569.- En caso de revocación de la libertad caucional se mandará reprimir al procesado, y, salvo la causa prevista en la fracción IV del artículo 568 de este código, se hará efectiva a favor de la víctima o del ofendido por el delito la garantía relativa a la reparación del daño; las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, se harán efectivas a favor del Estado.

Artículo 570.- Derogado.

Artículo 571.- Derogado.

Artículo 572.- El juez o tribunal ordenará la devolución de los depósitos o mandará cancelar las garantías, cuando:

I.- El acusado sea absuelto; y

II.- Cuando se dicte al inculcado auto de libertad o de extinción de la acción penal.

Cuando resulte condenado el acusado que se encuentre en libertad bajo caución y se presente a cumplir su condena, las cauciones para garantizar la reparación del daño y las sanciones pecuniarias se harán efectivas, la primera a favor de la víctima u ofendido por el delito y la segunda a favor del Estado. La otorgada para garantizar las obligaciones derivadas del proceso se devolverán al sentenciado o a quien indique éste, o en su caso, se cancelarán.

Artículo 573.- Cuando un tercero haya constituido depósito en fianza, hipoteca o fideicomiso para garantizar la libertad de un inculcado, las órdenes para que comparezca éste se extenderán con aquél. Si no pudiere desde luego presentar al inculcado, el juez podrá otorgarle un plazo hasta de quince días para que lo haga, sin perjuicio de liberar el orden de reprobación si lo estimare oportuno. Si concluido el plazo concedido al fiador no se obtiene la comparecencia del inculcado, se hará efectiva la garantía, en los términos de la fracción 569 de este código, y se ordenará la reprobación del inculcado.

Artículo 590.- El salvoconducto a que se refiere el artículo 587 será firmado por el Director General de Prevención y Readaptación Social.

Artículo 593.- Cuando hubiere expirado el término de la condena que debiera haberse purgado, de no concederse la libertad preparatoria, el reo ocurrirá al Tribunal Superior de Justicia para que éste, en vista de la sentencia y de los informes de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, haga la declaración de quedar el reo en absoluta libertad.

CAPÍTULO III

De la retención

Artículo 594.- Derogado.

Artículo 595.- Derogado.

Artículo 596.- Derogado.

Artículo 597.- Derogado.

Artículo 598.- Derogado.

Artículo 599.- Derogado.

Artículo 600.- Derogado.

Artículo 601.- El que hubiere sido condenado por sentencia ejecutoriada y se encuentre en el caso del artículo 73 del Código Penal, podrá ocurrir al Ejecutivo, por conducto de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social solicitando la conmutación de la sanción que se le hubiere impuesto.

El condenado acompañará a su solicitud, testimonio de la sentencia y, en su caso, las constancias que acrediten plenamente los motivos que tuviere para pedir la conmutación.

Artículo 602.- Al otorgarse la conmutación se estará a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal.

Artículo 629.-

I.-

II.- Se deroga.

III.-

Artículo 650.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social formará cada año una lista de los individuos que reúnan los requisitos indispensables para desempeñar el cargo de jurado, y mandará que se publique el día primero de noviembre.

Artículo 651.- Los individuos comprendidos en la lista y que carezcan de los requisitos señalados en el artículo 649, estarán en la obligación de manifestarlo así a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

Artículo 652.- Dentro de este término, las personas incluidas en las listas tendrán derecho para presentar, ante la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, manifestaciones a que se refiere el artículo anterior, así como la excusa que tuviere.

Artículo 653.- El veinticinco de noviembre de cada año, a más tardar, se reunirá el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Director General de Prevención y Readaptación Social y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, para resolver, sin recurso alguno, sobre las manifestaciones y solicitudes que se hubieren presentado. Corregida así la primera lista, se formará la definitiva que publicará la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

Artículo 660.-

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-

Artículo 574 bis.- Lo previsto en este capítulo será aplicable en lo conducente a la libertad bajo caución que otorgue el Ministerio Público en averiguación previa.

Artículo 575.- La ejecución de las sentencias ejecutoriadas en materia penal corresponde a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. Esta designará los lugares en que los reos deban extinguir las sanciones privativas de libertad, ejercerá todas las funciones que le señalen las leyes y reglamentos, practicará todas las diligencias para que las sentencias se cumplan estrictamente y reprimirá todos los abusos que cometan sus subalternos.

Artículo 576.- Pronunciada una sentencia ejecutoriada condenatoria o absolutoria, el juez o el tribunal que las pronuncie expedirá dentro de cuarenta y ocho horas, una copia certificada para la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con los datos de identificación del reo. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de cinco a quince días de salario mínimo.

Artículo 580.- El juez o tribunal están obligados a dictar de oficio, todas las providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposición de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. El incumplimiento de esta obligación sancionará con multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo.

Artículo 581.- Recibida por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social la copia de la sentencia y puesta a su disposición el reo, designará a éste el lugar en que deba extinguir la sanción privativa de libertad.

Artículo 582.- Para la ejecución de las sanciones, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social se sujetará a lo prevenido en el Código Penal, en éste y en las leyes y los reglamentos respectivos.

Artículo 583.- Cuando algún reo que esté purgando una sanción privativa de libertad, crea tener derecho a la libertad preparatoria por haber cumplido con los requisitos que exigen los artículos 84 y siguientes del Código Penal, ocurrirá a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, solicitándole y acompañándole los certificados y demás pruebas conducentes.

Artículo 585.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social resolverá sobre la solicitud a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 586.- Cuando se conceda la libertad preparatoria, el Delegado de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social investigará la solvencia e idoneidad del fiador propuesto, en vista de la información, la Dirección resolverá si es o no de admitirse al fiador.

Artículo 588.- Cuando el reo incurriera en alguno de los casos previstos por el artículo 86 del Código Penal, la autoridad que tenga competencia, dará parte a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para que resuelva si revoca o no la libertad preparatoria.

Artículo 589.- Cuando el reo cometiere un nuevo delito, se estará lo dispuesto en el artículo 86 del Código Penal, y el juez de la causa lo comunicará a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para los efectos legales correspondientes.

Artículo 590.- El salvoconducto a que se refiere el artículo 587 será firmado por el Director General de Prevención y Readaptación Social.

Artículo 593.- Cuando hubiere expirado el término de la condena que debiera haberse purgado, de no concederse la libertad preparatoria, el reo ocurrirá al Tribunal Superior de Justicia para que éste, en vista de la sentencia y de los informes de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, haga la declaración de quedar el reo en absoluta libertad.

CAPÍTULO III

De la retención

Artículo 594.- Derogado.

Artículo 595.- Derogado.

Artículo 596.- Derogado.

Artículo 597.- Derogado.

Artículo 598.- Derogado.

Artículo 599.- Derogado.

Artículo 600.- Derogado.

Artículo 601.- El que hubiere sido condenado por sentencia ejecutoriada y se encuentre en el caso del artículo 73 del Código Penal, podrá ocurrir al Ejecutivo, por conducto de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social solicitando la conmutación de la sanción que se le hubiere impuesto.

El condenado acompañará a su solicitud, testimonio de la sentencia y, en su caso, las constancias que acrediten plenamente los motivos que tuviere para pedir la conmutación.

Artículo 602.- Al otorgarse la conmutación se estará a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal.

Artículo 629.-

I.-

II.- Se deroga.

III.-

Artículo 650.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social formará cada año una lista de los individuos que reúnan los requisitos indispensables para desempeñar el cargo de jurado, y mandará que se publique el día primero de noviembre.

Artículo 651.- Los individuos comprendidos en la lista y que carezcan de los requisitos señalados en el artículo 649, estarán en la obligación de manifestarlo así a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

Artículo 652.- Dentro de este término, las personas incluidas en las listas tendrán derecho para presentar, ante la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, manifestaciones a que se refiere el artículo anterior, así como la excusa que tuviere.

Artículo 653.- El veinticinco de noviembre de cada año, a más tardar, se reunirá el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Director General de Prevención y Readaptación Social y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, para resolver, sin recurso alguno, sobre las manifestaciones y solicitudes que se hubieren presentado. Corregida así la primera lista, se formará la definitiva que publicará la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

Artículo 660.-

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-

XV.-

ARTÍCULO CUARTO.- De la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforman los siguientes artículos: 5 fracción IV, 22, 66 fracción IV, 78 tercer párrafo y 136; y se adiciona un tercer párrafo a la fracción segunda del artículo 22, un segundo párrafo a la fracción X del artículo 73, para quedar como sigue:

Artículo 5.-

I.-

II.-

III.-

IV.- El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta Ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma Ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses materiales, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala.

Artículo 22.-

I.-

II.-

III.-

IV.- En los casos en que el acto de autoridad combatido mediante demanda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, el término para interponer será siempre de 15 días.

Artículo 66.-

I.-

II.-

III.-

IV.- Si hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de Amparo, si hubiesen aconsejado como asesores la resolución reclamada, o si hubiesen emitido, en otra instancia o jurisdicción la resolución impugnada.

V.-

VI.-

Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente:

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

Artículo 78.-

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-

XV.-

XVI.-

XVII.-

XVIII.-

XIX.-

XX.-

XXI.-

XXII.-

XXIII.-

XXIV.-

XXV.-

XXVI.-

XXVII.-

XXVIII.-

XXIX.-

XXX.-

XXXI.-

XXXII.-

XXXIII.-

XXXIV.-

XXXV.-

XXXVI.-

XXXVII.-

XXXVIII.-

XXXIX.-

XL.-

XLI.-

XLII.-

XLIII.-

XLIV.-

XLV.-

XLVI.-

XLVII.-

XLVIII.-

XLIX.-

L.-

LI.-

LII.-

LIII.-

LIV.-

LV.-

LVI.-

LVII.-

LVIII.-

LIX.-

LX.-

LXI.-

LXII.-

Artículo 136.- Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito únicamente en cuanto a ella, se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.

De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se producirá la suspensión sólo cuando el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigné dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que éste sealle, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.

En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventivo, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no haberse solicitado.

La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a

los artículos 1616 párrafos primero y segundo 1927 y 1928 para quedar como sigue:

Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnera o menoscaba legítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual, obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme previene el artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

Artículo 1927.- El Estado tiene obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les están encomendadas. Esta responsabilidad será solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en los demás casos, en los que sólo podrá hacerse efectiva en contra del Estado cuando el servidor público directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

Artículo 1928.- El que pague los daños y perjuicios causados por sus servidores, empleados, funcionarios y operarios, puede repetir de ellos lo que hubiere pagado.

ARTÍCULO SEPTIMO.- De la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se reforma el artículo 76 párrafo primero, se adiciona un artículo 77 bis y una fracción III al artículo 78, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis.- Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños o perjuicios particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en caso de liquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a la instancia judicial o a cualquier otra.

El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización hecha a los particulares.

Si el órgano del Estado niega la indemnización, o si el monto no satisface al reclamante, se tendrán expedidas, a su elección, la vía administrativa o judicial.

ARTÍCULO SEXTO.- Del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República, en Materia Federal se reforman los

artículos 1616 párrafos primero y segundo 1927 y 1928 para quedar como sigue:

Artículo 1616.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnera o menoscaba legítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual, obligación de reparar el daño moral tendrá

Cuando se haya aceptado una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en la que se proponga la reparación de daños y perjuicios, la autoridad competente se limitará a su determinación en cantidad líquida y la orden de pago respectiva.

Artículo 78.- Las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente:

I.-

II.-

III.- El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y perjuicios, prescribirá en un año, a partir de la notificación de la resolución administrativa que haya declarado cometido la falta administrativa.

ARTICULO OCTAVO.- De la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación se adiciona una fracción X al artículo 23 recorriéndose la actual fracción X para quedar como fracción XI, para quedar como sigue:

Artículo 23.-

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

IX.-

X.- Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía, o acudir ante la instancia judicial competente.

XI.- (Texto de la actual fracción X).

ARTICULO NOVENO.- De la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se adiciona una fracción a su artículo 21, que sería la VII, mientras que su fracción VII pasaría a ser la VIII, para quedar como sigue:

Artículo 21.- Las Salas del Tribunal son competentes para conocer:

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-

VII.- Las resoluciones que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía, o acudir ante la instancia judicial competente.

VIII.- (Texto de la actual fracción VII).

ARTICULO DECIMO.- De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se reforma el último párrafo del artículo 10, para quedar como sigue:

Artículo 10.-

El Estado estará obligado a la reparación de los daños y perjuicios, en los términos de los artículos 1927 y 1928 del Código Civil.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- De la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se reforma el artículo 2 párrafo primero, para quedar como sigue:

Artículo 2.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o de deuda pública, y por concepto de responsabilidad patrimonial, que realizan:

I.-

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se adiciona la fracción XVI del artículo 82 para quedar como sigue:

Artículo 82.-

I a XV.-

XVI.- Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto en otra instancia o jurisdicción.

No es motivo de impedimento para magistrados de los Tribunales Unitarios el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones II a IX del artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

SEGUNDO.- Con relación a los procedimientos que se sigan por delitos contra la salud, iniciados con anterioridad a la vigencia del presente decreto, continuarán en los términos de las nuevas disposiciones contenidas en ese decreto, aun cuando éstas hayan cambiado de numeración.

TERCERO.- A las personas que hayan cometido un delito, incluidas las procesadas o sentenciadas, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, les serán aplicables las disposiciones del Código Penal vigentes en el momento en que se haya cometido, sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del citado Código.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

México, D. F., a 21 de diciembre de 1993.- Dip. Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Sergio González Santa Cruz, Secretario.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.

**COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ATENQUIQUE, S.A. DE C.V.
SERVICIOS ATENSA, S.A. DE C.V.**

AVISO DE FUSION

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace del conocimiento público que mediante Asambleas Extraordinarias de Accionistas de **COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ATENQUIQUE, S.A. DE C.V.** y de **SERVICIOS ATENSA, S.A. DE C.V.**, se acordó fusionar por absorción a dichas sociedades y autorizándose el otorgamiento del Convenio de Fusión respectivo, que consigna las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes otorgantes acuerdan fusionarse por absorción, subsistiendo **COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ATENQUIQUE, S.A. DE C.V.** y dejando de existir **SERVICIOS ATENSA, S.A. DE C.V.**

SEGUNDA. La fusión surtirá efectos entre las partes a partir de la fecha en que se acordó la fusión por las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de cada Sociedad y frente a terceros, tres meses después de que se inscriba el acuerdo de fusión en el Registro Público correspondiente, sin que se haya formulado oposición alguna.

TERCERA. La Fusionante aumentará su capital social variable, en la cantidad necesaria para que las acciones emitidas puedan ser distribuidas proporcionalmente entre los accionistas de la Fusionada, de acuerdo al capital contable de cada una. Las acciones que se emitan de acuerdo a esta cláusula, serán comunes, nominativas y sin expresión de valor nominal.

CUARTA. Para determinar el capital contable de cada Sociedad y el aumento de capital social mencionado, se tomarán en cuenta los estados financieros al 31 de agosto de 1993, que fueron aprobados por las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de la Fusionante y de la Fusionada.

QUINTA. La Fusionante asumirá los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la Fusionada, sin reserva ni limitación alguna y se obliga a pagar los pasivos contraídos por ésta última.

SEXTA. En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se acuerda la publicación de estos acuerdos de fusión junto con el balance de cada sociedad al 31 de agosto de 1993.

México, D.F. a 22 de octubre de 1993.

M. Rincón de las Velas

C.P. MAYELA RINCON DE VELASCO

Delegada Especial. Rúbrica.

C.P. HECTOR ORTIZ ROSALES

Delegado Especial. Rúbrica.

SERVICIOS ATENSA, S.A. DE C.V.

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 1993

	ATENSA
CIRCULANTE	3,145,439
DISPONIBLE	8,116
Efectivo	8,116
Inversiones Temporales	0
CUENTAS POR COBRAR	3,124,884
Clientes	0
Cias. Afiliadas	2,974,988
Anticipo a Proveed.	0
Deudores Diversos	149,899
Iva por Acreditar	0
I.S.R. por Recuperar	0
Otras cuentas por Cobrar	15
CEPROFIS por recuperar	0
INVENTARIOS	0
PAGOS ANTICIPADOS	12,439
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	683,878
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	0
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ACTIVO	3,828,517

	ATENSA
PASIVO	
CIRCULANTE	788,82
Creditos Bancarios	0
Proveedores	139,42
Cias. filiales	0
Impuestos por pagar	185,86
Otras Clas. Por pagar	589,04
I.S.R. por pagar	0
P.T.U. por pagar	26,54
Arrendam. Finan. C.P.	0
LARGO PLAZO	
Creditos Bancarios	0
Reservas Gastos	0
Otros pasivos a L.p.	0
CAPITAL CONTABLE	3,047,69
Capital Social	325,86
Act. del Capital Social	1,775,46
Resultado del ejercicio	(6,28)
Reserva-Legal	0
Utilidades Acumuladas	2,727,28
Actual de Util. Acum.	0
Actual de Util. del Ejerc.	0
Exceso o Insuf. de capital	(1,773,78)
Aport. Para F/Aumen. de cap.	0
Ganacia en Compra de Acc.	0
Interes Minoritario	0
TOTAL PASIVO	3,828,51

PARTIDO	MONTO DEL FINANCIAMIENTO EN 1994, NUEVOS PESOS
PAN	18,945,757.61
PRI	62,553,759.81
PPS	2,112,540.55
PRD	8,423,743.25
PFCRN	4,905,513.58
PARM	2,281,452.32
TOTAL	97,225,768.22

PARTIDO	NO. DE LEGISLADORES	FINANCIAMIENTO ANUAL
PAN	60	4,078,700.00
PRI	381	19,080,240.00
PPS	12	539,280.00
PRD	43	1,096,920.00
PFCRN	23	1,035,600.00
PARM	15	674,199.00
TOTAL	564	27,491,969.00

COMPANIA INDUSTRIAL DE ATENQUIQUE, S.A. DE C.V.
SERVICIOS ATENSA, S.A. DE C.V.
SERVICIOS ATENSA, S.A. DE C.V.

COMPANIA INDUSTRIAL DE ATENQUIQUE, S.A. DE CV.

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 1993

CIDASA

	CIDASA
CIRCULANTE	68,251,453
DISPONIBLE	78,673
Efectivo	(90,209)
Inversiones Temporales	168,882
CUENTAS POR COBRAR	40,006,512
Clientes	17,748,750
Cias. Afiliadas	0
Anticipo a Proveed.	5,065,933
Deudores Diversos	7,315,116
Iva por Acreditar	0
I.S.R. por Recuperar	0
Otras cuentas por Cobrar	187,208
CEPROFIS por recuperar	9,849,505

INVENTARIOS	21,458,553
PAGOS ANTICIPADOS	6,627,715

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	303,861,858
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	104,028,106
OTROS ACTIVOS	14,366,009
TOTAL ACTIVO	490,507,508

PASIVO	
CIRCULANTE	49,621,903
Creditos Bancarios	12,100,328
Proveedores	26,804,090
Cias. filiales	0
Impuestos por pagar	951,496
Otras Ctas. Por pagar	9,765,989
I.S.R. por pagar	0
P.T.U. por pagar	0
Arrendam. Finan. C.P.	0
LARGO PLAZO	1,620,607
Creditos Bancarios	1,620,607
Reservas Gastos	0
Otros pasivos a L.p.	0

CAPITAL CONTABLE	439,264,990
Capital Social	399,344,000
Act. del Capital Social	142,453,052
Resultado del ejercicio	(18,712,934)
Reserva Legal	3,739,699
Utilidades Acumuladas	25,410,246
Actual de Util. Acum.	0
Actual de Util. del Ejerc.	0
Exceso o Insuf. de capital	(112,969,073)
Aport. Para F/Aumen. de cap	0
Ganacia en Compra de Acc.	0
Interes Minoritario	0

490,507,508

México, D.F. a 22 de octubre de 1993.

C.P. MAYELA RINCON DE VELASCO
Delegada Especial. Rúbrica.

C.P. HECTOR ORTIZ ROSALES
Delegado Especial. Rúbrica.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ACUERDO sobre el financiamiento público a los partidos políticos en los términos del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.

ACUERDO SOBRE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 49 Y 81 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SEPTIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EN EL REGLAMENTO PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE REALICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82, PÁRRAFO 1, INCISO i) E INCISO y) DEL MISMO CÓDIGO, EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- SE DETERMINA UN INCREMENTO DEL 20% A LA CANTIDAD DE \$85'028,131.85 ESTABLECIDA COMO MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTIVIDAD ELECTORAL PARA EL AÑO DE 1994, SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN SESION DEL 31 DE ENERO DE 1992. EN CONSECUENCIA, EL MONTO A DISTRIBUIR ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ESTE RÉNGLON DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO DE 1994, ES LA CANTIDAD DE \$102'033,758.22 (CIENTO DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO NUEVOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) ASIGNÁNDOSE A CADA UNO DE ELLOS EL SIGUIENTE MONTO:

PARTIDO MONTO DEL FINANCIAMIENTO EN 1994, NUEVOS PESOS

PAN	18'845,757.61
PRI	65'553,759.81
PPS	2'112,540.65
PRD	8'423,748.25
PFCRN	4'806,519.58
PARM	2'291,432.32
TOTAL	102'033,758.22

SEGUNDO.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO b), DEL PÁRRAFO 7 DEL MENCIONADO ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SE DETERMINA EN LA CANTIDAD DE \$25'508,439.54 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE NUEVOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES GENERALES PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POPULAR SOCIALISTA, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL FRENTE CARDENISTA DE RECONSTRUCCION NACIONAL, AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA, DEMOCRATA MEXICANO, DEL TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO POR EL AÑO DE 1994, CANTIDAD EQUIVALENTE AL 10% DEL FINANCIAMIENTO TRIANUAL POR ACTIVIDAD ELECTORAL DETERMINADO EN SESION DEL CONSEJO GENERAL EL 31 DE ENERO DE 1992 MAS LO CORRESPONDIENTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE OBTUVIERON SU REGISTRO CON POSTERIORIDAD A LAS ÚLTIMAS ELECCIONES FEDERALES. DICHA CANTIDAD SE DISTRIBUIRA POR PARTES IGUALES ENTRE ESTOS PARTIDOS POLÍTICOS, CORRESPONDIÉNDOLES A CADA UNO LA SUMA DE \$2'834,271.06 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN NUEVOS PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), POR CONCEPTO DE ESTE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO DE 1994.

TERCERO.- SE DETERMINA EN LA CANTIDAD DE \$27'400,560.00 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA NUEVOS PESOS MONEDA NACIONAL), EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR SUBROGACION DEL ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE LOS LEGISLADORES HABRIAN DE APORTAR PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS PARTIDOS A DISTRIBUIRSE ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE EL AÑO DE 1994, CONFORME AL NUMERO DE LEGISLADORES INTEGRANTES DE SU GRUPO PARLAMENTARIO EN AMBAS CAMARAS, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

PARTIDO NO. DE LEGISLADORES FINANCIAMIENTO ANUAL

PAN	90	4'076,700.00
PRI	381	19'080,240.00
PPS	12	539,280.00
PRD	43	1'996,620.00
PFCRN	23	1'033,620.00
PARM	15	674,100.00
TOTAL	564	27'400,560.00

*** CUARTO.-** SE DETERMINA PARCIALMENTE EN LA CANTIDAD DE N\$17'629,102.16 (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS NUEVOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS POR EL AÑO DE 1994, A DISTRIBUIRSE ENTRE ELLOS, DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDO	NUEVOS PESOS
PAN	1'933,275.56
PRI	7'133,961.78
PPS	1'470,462.44
PRD	2'305,314.53
PFCRN	202,089.90
PARM	1'299,961.28
PDM	398,689.87
PT	1'505,150.93
PVEM	1'380,195.87
TOTAL	17'629,102.16

QUINTO.- SE DETERMINA EN LA CANTIDAD DE N\$9'353,094.51 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO NUEVOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PARTIDOS POLITICOS POR EL AÑO DE 1994, A DISTRIBUIRSE ENTRE ELLOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDO	NUEVOS PESOS
PPS	1'700,562.64
PFCRN	1'700,562.64
PARM	1'700,562.64
PDM	1'417,135.53
PT	1'417,135.53
PVEM	1'417,135.53
TOTAL	9'353,094.51

SEXTO.- LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL PARA EL AÑO DE 1994 A TRAVES DE LOS DIVERSOS PUNTOS DEL PRESENTE ACUERDO, SERAN MINISTRADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS, EN PARTIDAS MENSUALES DE IGUAL MONTO, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES DE CADA MES, EXCEPTO LA MENSUALIDAD DE ENERO, QUE DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA APROBACION DE ESTE ACUERDO.

SEPTIMO.- EL PRESENTE ACUERDO DEBERA SER PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, JOSE PATROCINIO GONZALEZ BLANCO GARRIDO.- RUBRICA.- EL DIRECTOR GENERAL, ARTURO NUÑEZ JIMENEZ.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, AGUSTIN RICOY SALDAÑA.- RUBRICA.

FINANCIAMIENTO ANUAL
4'076,700.00
19'080,240.00
538,280.00
1'098,820.00
1'033,820.00
674,100.00
27'400,260.00

PARTIDO
PAN
PRI
PPS
PRD
PFCRN
PARM
TOTAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE DURANGO

CURSOS ABIERTOS E INTENSIVOS

CLAVE: 10PNS0002H

DURANGO, DGO.

Incorporada según Decreto Publicado en el Periódico Oficial No. 50

de fecha veintitres de junio de 1974

ACTA DE EXAMEN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS No. 1731

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 10:20 horas del día 13 de junio de mil novecientos ochenta y nueve se reunieron en el local que ocupa la Dirección de la Escuela Normal Superior de Durango, Cursos Intensivos los ciudadanos Profesores

PRESIDENTE: JESUS HERRERA DIAZ

SECRETARIA: FELIPA MARTINEZ GURROLA

VOCAL: ROSARIO PREZA GARCIA

designados por la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción Social para revisar el expediente de MA. DEL CARMEN HOLGUIN RUIZ

Pasante de la Especialidad de PSICOLOGIA

para obtener el título de Profesor(a) de Educación Media en la Especialidad citada, conforme al "acuerdo mediante el cual los Profesores que actualmente se encuentran prestando sus servicios en Instituciones dependientes de la Federación y de Entidades Federativas podrán obtener su Título Profesional, publicado en el Periódico Oficial No. 15 de fecha 21 de Agosto de 1988 y tomando en consideración la fe de erratas publicado en el periódico Oficial No. 48 de fecha 15 de Diciembre de 1988, el cual se basa en el acuerdo No. 127 que la Secretaría de Educación Pública, ha publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de marzo de 1987 del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Habiéndose encontrado correctos los siguientes documentos requeridos: SOLICITUD DE EXAMEN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS, COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO, CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA, CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE EDUCACION NORMAL SUPERIOR Y CONSTANCIA DE SERVICIO, y habiendo reunido el pasante mencionado el requisito de TENER UN PROMEDIO MINIMO DE CALIFICACIONES DE OCHO EN SUS ESTUDIOS PROFESIONALES Y PRESENTAR UN CREDITO ESCALAFONARIO ANUAL CON LA MAXIMA PUNTUACION se levanta la presente, la cual firman de conformidad los C.C. Profesores que intervinieron.

Presidente de la Comisión Coordinadora de Titulación

Profr. Jesús Herrera Díaz

Secretaria

Profra. Felipa Martínez Gurrola

Vocal

Profra. Rosario Preza García

El Director de la Escuela

Profr. Everardo García Balderas

Vo. Bo.

Secretario de Educación, Cultura y Promoción Social

Lic. José Hugo Martínez Ortiz

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA Y PROMOCION SOCIAL



LIC. ALFREDO BRACHO BARBOSA

EL C. LICENCIADO ALFREDO BRACHO BARBOSA, SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, -- -- -- C E R T I F I C A que la firma que calza el presente documento, corresponde a la del C. LICENCIADO JOSE HUGO MARTINEZ ORTIZ, Secretario de Educación, Cultura y Promoción Social, en la fecha en que se estampó, Victoria de Durango, Dgo., a los dos días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y tres.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE

CURSOS

CLAVE:

DURANGO, DGO.

Incorporada según Decreto Publicado en el Periódico Oficial No.

de fecha

de junio

de 1988

ACTA DE EXAMEN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS No. 1173

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 13:20 horas del día 27 de

mayo de mil novecientos ochenta y nueve se reunieron en el local

que ocupa la Dirección de la Escuela Normal Superior de Durango, Cursos

los ciudadanos Profesores

PRESIDENTE: JESUS HERRERA DIAZ

SECRETARIA: FELIPA MARTINEZ GURROLA

VOCAL: ROSARIO PREZA GARCIA

designados por la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción Social para
revisar el expediente de ANTONIA AGUIRRE GUTMAN

Pasante de la Especialidad de ORIENTACION ESCOLAR

para obtener el título de Profesor(a) de Educación Media en la Especialidad
citada, conforme al "acuerdo mediante el cual los Profesores que actualmen-
te se encuentran prestando sus servicios en Instituciones dependientes de la
Federación y de Entidades Federativas podrán obtener su Título Profesio-
nal, publicado en el Periódico Oficial No. 15 de fecha 21 de Agosto de 1988
y tomando en consideración la fe de erratas publicado en el periódico Oficial
No. 48 de fecha 15 de Diciembre de 1988, el cual se basa en el acuerdo No.
127 que la Secretaría de Educación Pública, ha publicado en el Diario Oficial
de la Federación de fecha 27 de marzo de 1987 del Gobierno Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos.

Habiéndose encontrado correctos los siguientes documentos requeridos:

ACTA DE EXAMEN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS, DE LA CIUDAD DE DURANGO

ACTA DE EXAMEN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS, DE LA CIUDAD DE DURANGO

ACTA DE EXAMEN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS, DE LA CIUDAD DE DURANGO

ACTA DE EXAMEN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS, DE LA CIUDAD DE DURANGO

y habiendo reunido el pasante mencionado el requisito de

haber cumplido con las calificaciones de ocho en sus exámenes finales

se levanta la presente, la cual firman de conformidad los C.C. Profesores que

intervinieron.

Presidente de la Comisión Coordinadora de Titulación

Profr. Jesús Herrera Díaz

Secretaria

Profra. Felipa Martínez Gurrola

Vocal

Profra. Rosario Preza García

El Director de la Escuela

Profr. Eusebio García Balderas

V. B.

El Secretario de Educación, Cultura y Promoción Social

Lic. José Hugo Martínez Ortiz

EL C. LIC. ###

Victoria de Durango, Dgo., a los diecinueve días del mes

de junio de mil novecientos ochenta y nueve.

LIC. SALVADOR MENDIVIL L. A. D. E.